

El Salvador en 2007 Política, economía y sociedad*

Luis Armando González**

Resumen

En este artículo se hace una reseña de los dinamismos políticos, económicos y sociales que se generaron en 2007, y se reflexiona sobre las perspectivas de El Salvador para 2008. Uno de sus argumentos centrales es que el quehacer político, en 2007, se caracterizó por los más variados reacomodos partidarios; esos reacomodos han estado condicionados por dinámicas no solo políticas, sino también sociales y económicas; dinámicas en torno a las cuales los partidos (y sus dirigencias) intentaron posicionarse de la mejor manera a modo de obtener los mayores beneficios posibles. Con todo, lo más sobresaliente fue, por un lado, el sesgo autoritario que se introdujo a determinadas prácticas estatales; y, por otro, la campaña electoral anticipada, en la cual Arena y el FMLN hicieron apuestas que —desde sus propios cálculos— los conducirán directo al control del Ejecutivo.

Palabras clave:

análisis económico, análisis político, análisis sociológico, El Salvador, elecciones, partidos políticos, pobreza, política gubernamental, problemas sociales, seguridad pública.

* Una versión previa de este documento fue preparado para la Fundación Friedrich Ebert.

** Director del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), UCA.

Los dinamismos políticos, económicos y sociales que han marcado a El Salvador en 2007 son expresión de algo más profundo: una fractura estructural que atraviesa al país, en virtud de la cual los tres ámbitos fundamentales que lo constituyen (el económico, el político y el socio-cultural) no solo no se complementan entre sí (es decir, no son coherentes), sino que cada uno de ellos sigue una lógica particular, con ritmos y tiempos distintos. Esta fractura convierte a la sociedad salvadoreña en una sociedad desintegrada y anómica, en la cual el nexo social —el vínculo entre individuos sostenido por el reconocimiento y el respeto mutuos— está a un paso de romperse, dando pie a que se configure un esquema de convivencia social caracterizado por una especie de guerra de todos contra todos.

Este es el peor de los escenarios que se le abren al país en su futuro inmediato. Sencillamente, se trataría, de hacerse realidad los peores augurios, de una sociedad inviable, en tanto que las solidaridades fundamentales se habrían roto. Esta es una visión de conjunto de nuestra sociedad, ciertamente pesimista. Pero un vistazo, también general, de cada uno de los ámbitos que la conforman refuerza ese pesimismo. En primer lugar, se tiene el ámbito económico, que es el que más alimenta el espejismo del progreso, la modernización y la prosperidad. Dejando de lado el asunto de que en ninguna sociedad el mero crecimiento económico es garantía de bienestar social, el crecimiento en el país es una ficción, porque no tiene una base de sustentación firme. Depende de las remesas y, en estos momentos, se le quiere apuntalar con la promoción de inversiones extranjeras en el sector servicios, libre de impuestos. Esto supone ahogar más al sector agrícola y mantener en el estancamiento al sector industrial, sin cuya participación no hay crecimiento económico sostenible en el largo plazo.

Desde finales de 1989, se apostó por un esquema económico terciarizado, incapaz de asegurar la reproducción material de la sociedad salvadoreña. Su avance y consolidación se ha leído como señal de modernización económica (porque ha dado lugar a un proceso de expan-

sión de centros comerciales y financieros); y los beneficios obtenidos por sus gestores, como bonanza y crecimiento económicos. De más está decir que este esquema económico ha alimentado el optimismo de la derecha empresarial y política, convencida de que “lo mejor está por llegar”. En resumen, la fractura estructural de la sociedad salvadoreña tiene una de sus raíces en un esquema económico insostenible en el tiempo, cuyo anclaje en los servicios ha implicado el abandono del sector agrícola y el estancamiento del sector industrial.

En segundo lugar, está el ámbito político, esto es, el ámbito de los partidos y el Estado. Aquí el esquema prevaleciente apunta a la concentración del poder político en manos de la derecha representada por Arena, aunque ello no quiere decir que algunas cuotas del mismo no se repartan entre los demás partidos. En este ámbito todo gira en torno al poder que se quiere conseguir o se quiere conservar por distintas vías, siendo las elecciones uno de los vehículos privilegiados para ello. Una especie de pasión febril por el poder se ha apoderado de los actores políticos en los momentos actuales, lo cual hace que quienes se mueven en el ámbito político se olviden permanentemente de la sociedad.

Este esquema político es funcional al esquema económico terciarizado. La razón de ello es que Arena ha impuesto su lógica, que camina por una doble vía: por un lado, la subordinación del Estado a determinados intereses económicos; y por otro, un ejercicio autoritario del poder hacia los sectores sociales excluidos (especialmente si se revelan o reclaman sus derechos). El amarre del Estado con determinados círculos empresariales ha tenido como contrapartida la ruptura de la política (en sentido amplio) con la sociedad, especialmente con sus sectores mayoritarios. Otra forma de referirse a esto es que existe un “divorcio” entre la política y la sociedad. Un esquema político que es funcional para la élite empresarial es disfuncional para la sociedad en su conjunto. De ahí su fracaso no solo para hacerse cargo de las demandas ciudadanas, procesarlas y darles respuesta, sino también para contribuir a la integración social.

En suma, los tiempos y ritmos del ámbito político no son los de la sociedad. Quienes viven en y de la política (partidaria-estatal) creen que lo suyo es la mejor expresión de una democracia consolidada. En la actual coyuntura preelectoral este optimismo está saliendo a relucir de manera desproporcionada. El optimismo de Arena nace de su seguridad de que otra vez le propinará una paliza electoral al “comunismo”; el del FMLN, de que esta vez sí cuenta con el candidato adecuado para ganar; el del centro político, de que la polarización existente le va a dar ventajas; y el del PCN y el PDC, que gane quien gane siempre van a poder negociar ciertos privilegios. Desde fuera, no hay razones para ningún optimismo, ni sobre el desarrollo de la competencia electoral (en la cual se despilfarrarán recursos necesarios para otras cosas más urgentes) ni sobre su desenlace: aun en el escenario de un triunfo del FMLN, no se ve cómo ese partido pueda resolver los graves problemas de la sociedad salvadoreña. Y es que para gobernar bien no basta con tener buenas intenciones. Hay que tener un proyecto estratégico de gobierno, así como las fuentes posibles de recursos para sostenerlo. Esto no se ve en el FMLN. Como quiera que sea, de momento, las elecciones de 2009 no anuncian nada nuevo, sino que prometen ser la reedición de experiencias pasadas.

Finalmente, se tiene el ámbito socio-cultural. Este ámbito es el que padece los embates tanto de la lógica económica como del autoritarismo político. El impacto económico sobre lo socio-cultural da lugar a una aguda contradicción en la vida de los salvadoreños y salvadoreñas: por un lado, la necesidad de sobrevivir en una situación de exclusión; por otro, la creencia de que triunfar es fácil, de que el éxito está a la vuelta de la esquina. Esto último es alimentado por una cultura del consumismo desenfrenado que se traduce en frustración social permanente. Por su parte, el impacto de lo político sobre lo socio-cultural profundiza las exclusiones, al reducir a los ciudadanos a agentes privados, sujetos a los vaivenes del mercado y ante el cual ellos son meros consumidores. Quienes no aceptan

esta condición y reclaman sus derechos deben enfrentarse con la lógica autoritaria, cuyo propósito es asegurar la pasividad pública de los sectores sociales excluidos.

Cada uno de estos grandes ejes problemáticos —así como la fractura estructural que los sostiene— se ha concretado en dinamismos más puntuales que son, precisamente, los que han dado pie a las distintas coyunturas por las que ha transitado el país en este 2007. Con aquel trasfondo en mente, en este artículo se hace una revisión de los dinamismos políticos, económicos y sociales más relevantes de este año. Asimismo, a partir de ellos, se hace una valoración acerca de las perspectivas de El Salvador en 2008.

1. Ámbito político

El quehacer político en 2007 se ha caracterizado por los más variados reacomodos partidarios; esos reacomodos han estado condicionados por determinados temas de carácter no solo político, sino social y económico, en torno a los cuales los partidos (y sus dirigencias) han intentado posicionarse de la mejor manera, a modo de obtener los mayores beneficios posibles. En este apartado se reseñan algunos de los ejes temáticos relevantes en el ejercicio político-partidario de 2007. Obviamente, no se pierde de vista —como una tesis central del análisis— que en El Salvador la esfera política se ha mostrado incapaz de cumplir con la función de procesar y responder a las demandas sociales más urgentes. Y es que lo propio de la política es su divorcio con respecto a la sociedad. Visto desde Arena, lo importante ha sido mantener sus alianzas con la Democracia Cristiana y el PCN; gracias a ellas, su influencia en la Asamblea Legislativa es la de siempre, es decir, hacer del Congreso una caja de resonancia de las decisiones del Ejecutivo. Si a ello se suma el amarre con la derecha al que está sometida la Corte Suprema de Justicia, en el país la separación de poderes, con todas sus bondades, no pasa de ser una ficción. Una ficción peligrosa, sin duda, porque su contrapartida real es el debilitamiento del Estado no solo en su capacidad de presión y negocia-

ción ante los distintos grupos de poder, sino en su capacidad de controlar (e imponer su autoridad en) el territorio nacional. Estamos, pues, ante un modelo estatal agotado y en franca crisis. Es decir, urge replantear el tema del Estado, orientando el debate no hacia los mecanismos para lograr su eliminación definitiva —sueño de algunos neoliberales—, sino hacia la conquista de un Estado democrático de derecho.

1.1. XV aniversario de los Acuerdos de Paz

2007 inició con una noticia que despertó interés entre distintos sectores socio-políticos antes de la celebración del XV aniversario del fin del conflicto armado. En efecto, el 5 de enero, una comisión interpartidaria avaló por unanimidad la “Declaración de los partidos políticos en ocasión del XV Aniversario del acuerdo de paz”, la cual sería firmada el 15 de enero por los secretarios generales y presidentes de los partidos políticos. En la Declaración, cuya redacción estuvo a cargo de una subcomisión integrada por Silvia Aguilar (Arena), Nidia Díaz (FMLN), Rafael Machuca (PCN), Ana Guadalupe Martínez (PDC), Héctor Dada Hirezi (Cambio Democrático) e Ileana Rogel (FDR), se retomaron las tres grandes líneas que se pactaron en los Acuerdos de Paz de 1992: seguridad, economía y reformas electorales. En materia económica, el compromiso era impulsar un pacto fiscal que generara condiciones para la construcción de un desarrollo humano sostenible; en materia electoral, impulsar reformas para asegurar la legitimidad del sistema; mientras que el compromiso con la seguridad apuntaba a concertar y respaldar estrategias efectivas para prevenir y combatir el fenómeno delincencial¹.

En el documento estamparían sus firmas el presidente de la República y de Arena, Antonio Saca, y el coordinador general del FMLN, Medardo González; además de los secretarios generales del PDC, Rodolfo Parker; PCN, Ciro Cruz Zepeda; CD, Héctor Dada; y FDR, Julio

Hernández. Sin embargo, todo se quedó en promesas, pues la rúbrica de la Declaración no se realizó. Hubo quienes, desde la oposición, no dudaron en responsabilizar a Arena del fracaso de la iniciativa, lo cual ponía de manifiesto —según ellos— las dificultades para un diálogo entre las diferentes fuerzas políticas del país. De todos modos, independientemente de qué partido fuera el culpable del fracaso en la firma del texto, lo cierto es que con ello se esfumaron las posibilidades de convertir al XV aniversario de los Acuerdos de Paz en una oportunidad para discutir las razones del estancamiento del proceso salvadoreño y reencontrarse con el espíritu de los históricos documentos.

Así pues, en el estilo de siempre, se celebró el XV aniversario de los Acuerdos de Paz. En los actos oficiales —efectuados en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones— participaron, de forma conjunta, el Gobierno y el FMLN, así como representantes de distintos sectores de la sociedad salvadoreña, los firmantes de los Acuerdos de Paz y las delegaciones presidenciales de México, Panamá, República Dominicana y los países de Centroamérica. Se contó, además, con la presencia de Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la ONU, y Álvaro de Soto, ex representante de la ONU en El Salvador. Como en otros años, antes del acto oficial, tanto Arena como FMLN hicieron sus propias celebraciones. El primero lo hizo en la plaza dedicada al ex mayor Roberto D’Aubuisson, fundador del partido; el segundo, con una concentración en la Plaza Cívica, en el centro de San Salvador.

Tampoco faltaron las manifestaciones de la sociedad civil. En el monumento al Salvador del Mundo, distintas iglesias realizaron un acto de reflexión en conmemoración de la paz. Por su parte, miembros de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador se concentraron en las afueras de la Asamblea Legislativa, con el fin de exigir la agilización de la revisión de

1. “Declaración de los partidos políticos en ocasión del XV Aniversario del acuerdo de paz”, *Proceso*, 1225, 17 de enero de 2007, pp. 14-15.

las reformas a la Ley de Lisiados. Y es que, a pesar de que hace unos diez años la ONU dio por finiquitado el proceso de paz en El Salvador, distintos actores socio-políticos insisten en que los Acuerdos de Paz no se han cumplido a cabalidad. Es cierto que uno de los objetivos que se perseguía con la firma de la paz era el fin de la guerra civil; pero ese no era su fin último, sino propiciar la edificación de un proyecto de sociedad a partir del cual otro conflicto armado no fuera posible, esto es, un proyecto de sociedad en el cual no existieran las causas estructurales que alimentaron la guerra civil que en ese momento llegaba a su fin. Se buscaba, en otras palabras, construir una sociedad reconciliada, para lo cual eran claves un conjunto de reformas políticas, destinadas a apuntalar la democratización del país, que debían ser acompañadas por una serie de reformas económico-sociales, que apuntaban a la creación de un orden más incluyente, justo y solidario. Quince años después de la firma de los Acuerdos de Paz, ese nuevo orden económico-social no se había concretado. En la misma medida, la democratización se encontraba estancada, dando señales, cada vez más acusadas, de una reversión autoritaria de incalculables consecuencias para el desarrollo político del país².

En un editorial de *ECA*, dedicado a los quince años de los Acuerdos de Paz, se hizo un juicio severo pero justo del significado de la celebración en los momentos actuales:

Esta realidad de unos acuerdos de paz con deuda con la memoria histórica del país, sin eficacia social ni procesos de transformación estructural adecuados, ha tendido más a propiciar la polarización política que a la búsqueda de soluciones racionales. Los mismos funcionarios del Gobierno de Arena lo reconocen en privado, y aceptan las recomendaciones de los consultores electorales, que insisten en que la polarización y la consiguiente radicalización del FMLN favorecen

al partido en el Gobierno. Conscientes de ello, y partidarios de esta especie de dictadura monocolor arenera, los grandes medios y algunos sectores del gran capital salvadoreño abonan el terreno de la polarización. El FMLN, al insistir en convertirse en el protagonista único y auténtico de las reivindicaciones sociales, ha favorecido la tendencia y ha incidido peligrosamente en un empobrecimiento creciente del movimiento social. Y ha caído no pocas veces en la trampa de los poderes establecidos que desean un FMLN que despierte miedo en los sectores más desfavorecidos, dependientes de remesas o azotados por la violencia y delincuencia generalizadas.³

Por otra parte, en lo que supuso una necesaria y merecida lección de decencia al Gobierno, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de visita en el país el 6 de febrero, manifestó que en El Salvador el delito de desaparición forzosa se continuaba cometiendo. “Mientras no se investigue y no se establezcan responsabilidades —sostuvo Santiago Corchera, presidente-relator del Grupo de Trabajo de la ONU—, la desaparición forzada es un delito de continuo y permanente cometimiento, sin importar que se haya realizado en épocas lejanas o recientes”. Según el informe presentado por el Grupo de Trabajo, un obstáculo para la aplicación de la justicia es la vigencia de la ley de amnistía. “En El Salvador —continuó Corchera— la ley de amnistía generó impunidad y es un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares”⁴. Obviamente, para Arena, el Gobierno y sus aliados políticos (PCN y PDC) esa exigencia de justicia no tuvo la menor importancia, tal como lo puso de manifiesto su intención —frustrada por la presión de organizaciones de la sociedad civil— de nombrar al ex mayor Roberto D’Aubuisson y a Napoleón Duarte “Hijos meritísimos” de El Salvador.

2. Cfr. “A quince años del fin de la guerra civil”, *Proceso*, 1225, 17 de enero de 2007, pp. 2-3.

3. “¿15 años de paz?”, *ECA*, 701-702, marzo-abril de 2007, p. 200.

4. Cfr. Portillo, E., “Cancillería a la ONU: la Ley de Amnistía no se toca”, *El Faro*, 12-18 de febrero de 2007.

1.2. Propensión al autoritarismo estatal

2007 fue escenario de una proclividad al ejercicio autoritario del poder gubernamental. En efecto, se dieron las condiciones propicias para que el Gobierno pudiera aplicar la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (conocida como “ley antiterrorista”), aprobada en septiembre de 2006. La mejor oportunidad la ofreció la captura, el 2 de julio, de Mario Belloso, acusado por la Fiscalía General de la República de ser el autor material en el asesinato de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) pertenecientes a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), y de herir a 10 más durante los disturbios suscitados frente a la Universidad de El Salvador, el 5 de julio de 2006. Prácticamente, desde que se dieron estos lamentables hechos, todo el aparato policial de El Salvador se dedicó a la persecución de Belloso y, casi un año después, la PNC logró su captura en circunstancias cuando menos misteriosas: se efectuó a las 6:40 de la mañana, en las cercanías de la urbanización San Luis, en la Diagonal Universitaria, por agentes novatos, luego de que un intenso operativo de búsqueda organizado por la PNC desde el día anterior, en horas de la tarde, no pudiera hacerlo. Belloso fue capturado mientras se hacía pasar por un indigente. Y lo que dio paso a la captura, según la versión oficial, fue una llamada confidencial al sistema 911, que advirtió de su presencia en el lugar donde el prófugo residía, en el municipio de Mejicanos.

Algo preocupante fue que, desde el arresto de Mario Belloso, funcionarios de gobierno y medios de comunicación no dejaron de referirse al asunto como si se tratara de algo de la mayor trascendencia. Era como si el conjunto de la vida nacional dependiera de su captura, como si una vez en manos de las autoridades, la sociedad pudiera respirar con alivio al irse revelando —según la versión oficial— no solo sus astutos movimientos para evadir a la justicia, sino sus habilidades

militares, su “egocentrismo” revolucionario, su incidencia ideológica (doctrinaria) en diferentes instituciones educativas, sus habilidades para dirigir a través de Internet a sus subalternos de la Brigada Limón, sus conexiones internacionales, su estrategia para desarrollar una peligrosa (¿y poderosa?) guerrilla urbana... Es decir, se presentó el asunto como si la sociedad salvadoreña estaba dando cobijo a —y, a su vez, siendo amenazada por— una especie de mezcla entre Osama Bin Laden y Ernesto “Che” Guevara.

En este sentido, la tesis que se vendió en ese momento era que no se estaba tras un sospechoso común y corriente de asesinato, sino ante un verdadero monstruo. O un “engendro” —tal como fue calificado en un comentario de *El Diario de Hoy*—, “de aquellos que llevan décadas promoviendo el resentimiento y sembrando el odio desde diferentes estrados: plazas públicas, cátedras de universidad, artículos y editoriales de radios alternativas y hasta sermones desde donde se manipula el Evangelio de Jesús”⁵. Si la captura de Belloso ya era en sí misma motivo de satisfacción, con mayor razón lo era el haber dado un “golpe a la incipiente guerrilla”, que “estaba lista para atacar”, al igual que en 1972, cuando “un comando de la incipiente guerrilla mató a dos agentes de la Guardia Nacional, en las cercanías del antiguo Hospital Bloom”⁶. En este ambiente de autocomplacencia, algunos de los principales funcionarios públicos encargados de la seguridad pública (como Rodrigo Ávila y Ástor Escalante) trataron de lucirse ocupando espacios inmerecidos en los medios de comunicación, desde los cuales no solo buscaron enaltecer su imagen personal, sino también atacar a la oposición social y política. Estos funcionarios, al igual que otros miembros de Arena, insistieron en conectar a Belloso con el FMLN, leyendo sus actividades como parte de una estrategia del partido de izquierda para imponer el comunismo en El Salvador.

5. “El engendro”, *El Diario de Hoy*, miércoles 4 de julio de 2007, p. 12.

6. *Ibidem*.

Precisamente, es en esta línea que hay que entender la amplia atención mediática que recibió el caso Belloso. Por una parte, se tenía (y se tiene) en el país un aparato policial absolutamente cuestionado por su incompetencia, falta de profesionalismo y vínculos con el crimen organizado. Magnificar la importancia de Belloso suponía magnificar el trabajo policial que llevó a su captura. Y es que si se le trataba como un criminal cualquiera —semejante a los muchos que hay en el país—, entonces todo el tiempo y recursos dedicados a su persecución y captura se hubieran revelado como una muestra más de la incompetencia de la Policía: si tanto esfuerzo y tiempo le había costado a la PNC llevar ante la justicia a un individuo, ¿cuánto no le costaría desarticular las redes de crimen organizado que operan en El Salvador? De todos modos, visto el caso Belloso en su justa dimensión, su abordaje real dejó serias dudas acerca del desempeño no solo de la corporación policial, sino también de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué decir de la investigación del resto de eventos que rodearon la muerte de los dos agentes de la UMO por la que se acusa a Belloso? ¿Se investigó de dónde provinieron los disparos contra el campus de la Universidad de El Salvador? ¿Se estableció la identidad del responsable de haber herido de bala a Gerberth Salvador Rivas, jefe de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente? Sobre estos temas, mucho más simples que capturar a Belloso, no hubo resultado policial (ni fiscal) alguno, pese a que no habría que salir de la estructura de la PNC para aclararlos. Y lo mismo puede decirse de los delitos (extorsiones, tráfico de drogas, contrabando de vehículos) en los que se hayan involucrados miembros de la corporación policial. Aquí no ha habido ni hay éxitos de los cuales preciarse, al igual que no los hay en la investigación de los homicidios, secuestros y desapariciones que diariamente suceden en el país.

Pero la anterior fue solo una de las implicaciones del caso Belloso. La otra consistió en su

uso político por parte de Arena. Pocos casos como este podían ser tan potables políticamente para el partido de derecha. A Belloso se le magnificó como criminal, pero también como una amenaza nacional o, más específicamente, como una amenaza para la nación que Arena y la derecha han edificado a su conveniencia. Esta intencionalidad política —así como la pretensión de limpiar la deteriorada imagen de la PNC— convirtieron a Belloso en un monstruo. Obviamente, el objetivo no era destruirlo a él o destruir políticamente al FMLN (oposición conveniente al fin y al cabo), sino deslegitimar y desarticular cualquier resistencia social organizada al poder autoritario que Arena y la derecha ejercen sobre el país. Y qué mejor manera de deslegitimar (y desarticular) al movimiento social que hacerlo parte de un entramado terrorista montado por el FMLN. Es decir,

la muerte de los dos agentes de la UMO se constituyó en el factor desencadenante de una ofensiva autoritaria, en cuyo marco se pusieron a punto los instrumentos jurídicos orientados a contener, mediante la coerción, los focos de movilización social que comenzaron a cobrar presencia más permanente en la vida nacional, precisamente bajo la actual administración gubernamental. Convertir las movilizaciones sociales en actos de terrorismo y juzgar a quienes participan en ellas como terroristas fueron objetivos con los que el gobierno de Saca se comprometió a fondo; esos objetivos fueron alcanzados con la aprobación de la ley antiterrorista, desde la cual se otorgan a los aparatos coercitivos del Estado poderes extraordinarios para que, so pretexto de luchar contra el terrorismo, impidan el ejercicio de derechos civiles y políticos irrenunciables.⁷

Pero el caso Belloso no fue la única oportunidad que tuvo el Gobierno para llevar a la práctica la ley antiterrorista. El 2 de julio, una manifestación realizada en Suchitoto, en contra de una política nacional de descentralización del agua —que precisamente ese día iba a ser anunciada por el presidente Antonio Saca en dicho municipio—, no solo fue reprimida violentamente por la PNC, sino que a catorce

7. "Preocupante escenario nacional", *ECA*, 705, julio de 2007, pp. 498-499.

personas capturadas en los alrededores del lugar de la protesta se les aplicó la ley antiterrorista. Varias instituciones que denunciaron el comportamiento de las autoridades reportaron en su momento lo siguiente:

A las personas detenidas se les trasladó en helicóptero para Cojutepeque. En el trayecto, fueron objeto de tortura psicológica al amenazarlos con que serían lanzados desde las alturas. Las y los detenidos fueron consignados a la orden del juez de Cojutepeque, reclusos originalmente en Santa Cruz Analquito, ambos en el departamento de Cuscatlán; actualmente están detenidos en Cojutepeque, hasta por un plazo máximo de 72 horas, que manda la ley. El jueves se celebrará la audiencia, para determinar si se les pone en libertad o se les envía a juicio.⁸

Ni una ni otra cosa se hizo efectiva, sino una solución intermedia: al no poderse sostener las acusaciones de terrorismo contra las personas detenidas (una de ellas había sido liberada previamente por la jueza Lucila Fuentes de Paz, que fue la que decretó la detención provisional por tres meses contra las restantes trece⁹), fueron puestas en libertad, pero no definitiva sino condicional.

De todos modos, más allá de que el Gobierno pudiera sustentar con pruebas sólidas sus acusaciones de terrorismo en los casos reseñados¹⁰, lo más grave era que se estaba afianzando una legalidad autoritaria, la cual

se hizo acompañar de un discurso que comenzó a jugar, por una parte, con la identificación movilizaciones sociales igual terrorismo; y, por otra, movilizaciones sociales igual FMLN. Es decir, el gobierno de Saca buscó obtener rentabilidad

política de su ofensiva autoritaria, lo cual dio pie a una campaña de deslegitimación del FMLN con la mirada puesta en las elecciones de 2009. Cualquier pretexto fue bueno para que los voceros de Arena —incluido el presidente Saca— hicieran ver al FMLN como lo peor que le pudo haber sucedido a El Salvador. La oposición del partido de izquierda a la adquisición de nuevos préstamos internacionales y el cierre de RCTV en Venezuela crearon un clima propicio para que la propaganda gubernamental arremetiera con virulencia contra los efemelenistas, calificados como “enemigos de la libertad”.¹¹

Los casos de Mario Belloso y Suchitoto se constituyeron, sin duda alguna, en la manifestación más evidente de la lógica autoritaria que estaba cobrando presencia en el quehacer gubernamental. Pero eso no era todo. Esa lógica también se hizo presente de una forma más sutil con el uso de la figura del fideicomiso para hacer frente a una serie de necesidades financieras del Gobierno. Es cierto que el Estado salvadoreño tiene severos problemas financieros y que, ante la dificultad para resolverlos con recursos internos —vía un sistema tributario no solo eficiente, sino de carácter progresivo—, debe apelar al endeudamiento externo. Esta opción, sin embargo, se ha tornado cada vez más complicada, tal como se desprende, por ejemplo, del debate legislativo que se generó en febrero a propósito de la aprobación de un préstamo que, desde mediados de 2006, Arena ha buscado imponer en la Asamblea Legislativa para el financiamiento de la estrategia social del gobierno. A partir de ese momento, el FMLN asumió con firmeza una postura que ya no abandonaría: el recha-

8. Fespad, Las Dignas, Redes, Pro-Vida *et ál.*, “Los sucesos de Suchitoto”, *Proceso*, 1248, 4 de julio de 2007, p. 15.

9. *Cfr.* Tutela Legal del Arzobispado, “Resultados de las investigaciones iniciales de Tutela Legal”, *Proceso*, 1250, 18 de julio de 2007, pp. 13-16.

10. Era tan complicado aplicar a estos casos la ley antiterrorista que el Gobierno buscó una alternativa en el marco de los códigos Penal y Procesal Penal. En efecto, en agosto, con 43 votos a favor y 41 en contra, las fracciones legislativas de Arena y PCN aprobaron en sesión plenaria el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para reformar el artículo 348 del Código Penal y el 294 del Código Procesal Penal. Como resultado de ello, los castigos para los llamados desórdenes públicos “simples” serán de dos a cuatro años de cárcel; y para los “agravados”, de cuatro a ocho años, sin medidas sustitutivas o libertad condicional.

11. “Preocupante escenario nacional”, *óp. cit.*, p. 499.

zo a seguir endeudando internacionalmente al país, así como su propuesta de que se debería mejorar la recaudación fiscal para que el financiamiento para el gasto social proviniera del Presupuesto General de la Nación.

Asimismo, el partido de izquierda hizo pública su desconfianza —que se añadió, como una razón más, a su rechazo al endeudamiento externo— hacia las instituciones ejecutoras de los fondos provenientes de préstamos. El forcejeo entre ambos partidos no se hizo esperar. Distintos funcionarios de gobierno —incluido el presidente Saca— defendieron no solo la solvencia económica del país, que permitía seguirse endeudando (lo cual era avalado por instituciones como el Banco Mundial, Fusades y Funde), sino la transparencia y eficiencia con la que se usaban los recursos financieros del Estado. Pero el FMLN se mantuvo firme, porque, en palabras del diputado Gerson Martínez, “no podemos seguir endeudándonos y no se puede seguir dando cheques en blanco para la corrupción y para que despilfarran el dinero del pueblo”¹². Lo que vino inmediatamente después, por parte del Gobierno, fue una “campaña de información” para “comunicar” a la población el conjunto de males que se derivaban de la no aprobación de los préstamos, así como de la responsabilidad que tenía en ello el FMLN.

Junto a esa “campaña de información”, el Gobierno diseñó un plan que le permitiera no solo hacer frente a las necesidades financieras del Estado, sino sortear el debate y el control legislativo en materia de endeudamiento público. Este plan se articuló en torno al Fideicomiso para la Seguridad y la Educación (aprobado el 21 de junio de 2007 por la Asamblea Legislativa) que fue usado para encubrir un procedimiento de captura de recursos que consistía en la emisión de títulos valores —pagaderos en el futuro, con sus respectivos intereses— a ser comprados por personas o empresas particulares. Es decir, se trató de la

adquisición de una deuda —porque quienes comprarían los títulos valores no estaban cediendo algún patrimonio suyo al Estado— que se vendió como fideicomiso¹³. Aquí también se hizo un ejercicio autoritario del poder, aunque de modo más sutil. Y ello porque la figura del fideicomiso fue usada

no solo para paliar las necesidades financieras del Estado, sino para evadir el debate político en torno a temas tan delicados como el endeudamiento público. En este punto, el asunto, aunque grave, no es solo que el Estado salvadoreño se siga endeudando, sino que esas nuevas deudas —para pagar pensiones o para financiar programas sociales del Gobierno— se adquieren recurriendo a la mentira, la violación de las leyes y la anulación de la Asamblea Legislativa, foro en el que necesariamente deben discutirse y aprobarse (o rechazarse) las deudas financieras a ser asumidas por el Estado.¹⁴

Para finalizar, hay que decir que esta propensión estatal hacia el autoritarismo tuvo implicaciones de carácter electoral, en el sentido de que el Gobierno, Arena y algunos medios de comunicación de derecha se esforzaron por hacer creer a la población que tanto las actividades de Mario Belloso y la movilización social de Suchitoto —o semejantes— como la oposición del FMLN a los préstamos internacionales eran un anticipo de los males que le sobrevendrían al país de darse un eventual triunfo del partido de izquierda en las elecciones de 2009. Dicho de otro modo, las veleidades autoritarias del Gobierno se articularon con las intenciones de Arena de asegurar el control del Ejecutivo en las próximas elecciones.

1.3. Los tres años de gobierno de Saca y la campaña electoral anticipada

1.3.1. Los tres años de Antonio Saca

La campaña electoral con miras a 2009 comenzó temprano en el país. De hecho,

12. Cfr. “Crónica del mes. Enero-febrero”, *ECA*, 699-700, enero-febrero de 2007, p. 179.

13. En rigor, un fideicomiso es una figura jurídica que regula el proceso de transmisión de una herencia en virtud del cual un intermediario cumple la voluntad de quien otorga esa herencia.

14. “Preocupante escenario nacional”, *óp. cit.*, p. 497.

por el lado de Arena, los primeros pasos comenzaron a darse a principios de 2007, a propósito del cumplimiento de los dos años y medio de gestión del presidente Antonio Saca. En su informe a la nación, presentado el 8 de enero, Saca dio a conocer lo que definió como “los cinco ejes de trabajo” a impulsar en lo que quedaba de su mandato: impulso del crecimiento con equidad, perfeccionamiento del mercado, construcción de un Estado de derecho igualitario, profundización en lo social y mejoramiento de la seguridad ciudadana. Todavía no era claro que el discurso del compromiso social iba a convertirse en uno de los ejes de estrategia de campaña que recién se estaba iniciando. Su tercer año de gobierno iba a permitir a Saca afinar el carácter electoral de este eje. En cierta forma, los resultados de las encuestas de opinión pública realizadas antes del 1 de junio dieron a Saca (y a sus asesores) algunas señales de por dónde Arena debía relanzar su proyecto. Por una parte, entre algunos resultados de su sondeo, divulgados el 24 de mayo, el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (Ciops) de la Universidad Tecnológica mostró un descenso en los niveles de aprobación de la gestión gubernamental; para el 70.48% de los encuestados el Gobierno no estaba resolviendo los principales problemas del país. Al indagar sobre las intenciones de voto para las elecciones de 2009, la encuesta reveló que el FMLN obtendría un 30.36% del respaldo popular en las elecciones presidenciales, mientras que Arena un 28.17%, seguido por el PCN, con solo un 4.49%. En las elecciones municipales, el FMLN tendría un 29.65% de apoyo, Arena un 26.99%, mientras que el PCN se quedaría con un 5.76%. Y para diputados, el FMLN obtendría un 30.36%, Arena un 27.27% y el PCN un 5.15%¹⁵.

Ese mismo día, también se hicieron públicos los resultados de una encuesta realizada

por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. De esos resultados, lo que más llamó la atención fue la caída en la calificación obtenida por el presidente Saca en comparación con los dos primeros años de su gestión: el mandatario obtuvo un promedio de 5.71, que es la nota más baja que ha recibido Saca desde que asumió la presidencia de la República. El sondeo del IUDOP también reveló que, para amplios sectores de la población, la delincuencia ha aumentado durante el actual gobierno: un 50.3% señaló el combate a la criminalidad como el principal fracaso gubernamental. Y en lo que se refiere al alto costo de la vida, un 63.5% de los entrevistados y entrevistadas dijo creer que la economía del país había empeorado durante la actual gestión gubernamental. Por último, en lo que se refiere a la intención de voto, la encuesta mostró que el potencial ganador sería el partido Arena, que en las elecciones presidenciales recibiría un 33.6% de respaldo, en tanto que el FMLN sólo obtendría el 26.8%. En los comicios para diputados habría un empate técnico; mientras que en las de alcaldes, Arena sacaría una ventaja de 6 puntos porcentuales al partido de izquierda¹⁶.

Las encuestas de opinión pública no hicieron más que poner en evidencia las deudas pendientes del gobierno del presidente Saca cuando éste estaba por concluir su tercer año de gestión. Cabe recordar que en su discurso de toma de posesión (el 1 de junio de 2004) no dudó en afirmar que lo suyo sería el combate de la pobreza y la primacía de lo social por sobre lo económico, porque “en nuestro gobierno lo social no es complemento de nada, sino la base de todo”¹⁷. En esa oportunidad dijo lo siguiente:

La pobreza es una condición a la que ningún salvadoreño debe resignarse. Los que hemos recibido el encargo de conducir los destinos del país debemos combatirla de manera frontal. En

15. Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña, *Encuesta de opinión pública sobre el tercer año de gestión del presidente Elías Antonio Saca*, mayo de 2007, San Salvador: Ciops, 2007.

16. Instituto Universitario de Opinión Pública, “Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el tercer año de gobierno de Antonio Saca”, *Proceso*, 1243, 30 de mayo de 2007, pp. 12-14.

17. “Discurso de toma de posesión del nuevo presidente de la República, Elías Antonio Saca” (leído el 1 de junio de 2004), *Proceso*, 1102, 16 de junio de 2004, p. 12.

tal sentido, nuestro gobierno iniciará de inmediato la consolidación de una red de bienestar social, que tendrá por objetivo ofrecer los estímulos necesarios a todos aquellos compatriotas que se encuentren en desventaja económica y marginación social, para incorporarlos a la vida productiva.¹⁸

A tres años de su gestión, ese compromiso ni siquiera había sido cumplido a medias. Esa red de bienestar social no solo se comenzó a ejecutar tardíamente y con fines claramente político-electorales, sino que fue montada sobre una base financiera débil e insuficiente para atender eficazmente a “todos aquellos compatriotas que se encuentren en desventaja económica y marginación social”. Qué duda cabe que la principal debilidad del gobierno de Saca ha sido la escasez de recursos para atender no solo el desafío de la pobreza, sino otros desafíos relacionados con el bienestar y la seguridad sociales.

Otro conjunto de compromisos asumidos por Saca en 2004 fueron de naturaleza política: garantizar la seguridad ciudadana, trabajar por la concertación socio-política, y defender la legalidad y la democracia. A tres años de gestión, había más sombras que luces en cada uno de esos apartados. Así, la seguridad ciudadana estaba en una situación de crisis y deterioro extremos, y si bien no toda la responsabilidad debía ser atribuida a Saca, sí una parte importante de la misma. Porque, después de todo, la política de seguridad pública —su diseño y ejecución— era (y es) responsabilidad del Ejecutivo. En la concertación socio-política no le fue mejor al presidente Saca en esos tres años. Ni fue capaz de conducir pactos políticos importantes con la oposición ni fue capaz de promover consensos sociales amplios en torno a los graves problemas del país. A nivel social, sus interlocutores fueron los grandes empresarios; a nivel político, Arena y, derivadamente, el PCN y el PDC. Tan prioritaria fue su vinculación con Arena que, a lo largo de estos tres años, intercaló y mezcló sus funciones como presidente de la República con las que le co-

rresponden como presidente del Coena. Esto dio lugar no solo a fricciones permanentes con la oposición, sino a violaciones permanentes de la legalidad fundamental del país.

1.3.2. El discurso del compromiso social se abre paso

El presidente Saca no fue ajeno a las implicaciones políticas del creciente malestar social. Por ello, en su informe del tercer año de gobierno, decidió hacer frente a la situación, en primer lugar, haciendo hincapié en los logros de su gestión en materia de lucha contra el crimen organizado (para lo cual hizo alusión a la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y la Ley de Protección a Víctimas y Testigos), salud pública (la asignación de más recursos para el Hospital Rosales), infraestructura (obras de mitigación de riesgos y mejoramiento de la red vial), consensos políticos (Arena y el Gobierno habrían sido “acompañados” en sus iniciativas por algunos partidos políticos) y resultados económicos (una inversión de \$1,344 millones, generación de 18 mil empleos directos, y creación de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia de Competencia). En segundo lugar, trayendo a cuenta la filosofía de que “lo social no es complemento de nada, sino la base de todo”. Inmediatamente, enumeró los resultados de esa filosofía: Red Solidaria, Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), Fondo del Milenio (Fomilenio), Plan 2021, los proyectos del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (Fisdil) y la obra humanitaria realizada por su esposa, Ana Ligia de Saca, al frente de la Secretaría Nacional de la Familia, con los programas Ternura, Escuela Saludable y Crecer en Familia¹⁹.

Obviamente, las voces críticas ante el discurso de Saca no tardaron en hacerse escuchar. La reacción más airada provino del FMLN, que en un comunicado divulgado el mismo 1 de junio hizo ver que

18. *Ibíd.*, p. 11.

19. *Cfr.* “Crónica del mes. Mayo-junio”, *ECA*, 703-704, mayo-junio de 2007, p. 483.

además de los homicidios, se han multiplicado delitos como las extorsiones, el lavado de dinero, la corrupción institucionalizada y el narcotráfico [...] Todo ello deja al descubierto la incapacidad del presidente Saca en impulsar políticas de seguridad pública encaminadas a la prevención y combate de la violencia y el crimen organizado. Fracasaron estrepitosamente los tan publicitados planes “Mano Dura y Súper Mano Dura”. La promesa de un “País Seguro” se quedó en simple publicidad de campaña electoral.²⁰

Por su parte, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en un comunicado de prensa, cuestionó al presidente Saca por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, pues —a juicio de esta institución universitaria— la gran deuda pendiente es con “las víctimas ignoradas de los discursos oficiales; con las víctimas de todo tipo de atropellos en el pasado y en presente, así como con aquellas que seguirán surgiendo de continuar vigente el actual estado de cosas fundado en la exclusión, la iniquidad y la impunidad”²¹.

Sin embargo, esas críticas no hicieron mella en la visión que el Gobierno tenía (y tiene) de los problemas del país ni en el discurso que sobre el compromiso social el presidente Saca estaba reeditando en esos momentos, y que a partir de entonces comenzó a perfilarse como uno de los ejes de la campaña electoral de Arena. Este discurso se articuló con el debate en torno a los préstamos y con los casos de Belloso y de Suchitoto (como ya fue señalado), pero también con la discusión a propósito de las reformas electorales. En este último terreno, en junio —y en el marco de un fuerte debate en la Comisión Interpartidaria de la Asamblea Legislativa por el avance de las reformas electorales, los partidos políticos representados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordaron realizar elecciones separadas —por un lado, legislativas y municipales; por

otro, presidenciales— en 2009. Por razones distintas, Arena y el FMLN aceptaron dicha separación, pero su principal impulsor fue el PCN, preocupado —al igual que el PDC— por el arrastre de votos que logran los partidos mayoritarios cuando las elecciones coinciden²². De algún modo, el PCN buscaba otra vía para asegurarse una cuota de poder legislativo, una vez que con la expulsión de Wilfredo Salgado del partido (el 13 de junio) se abortaba la posibilidad de competir con solvencia en las presidenciales.

Arena, al ceder en la separación de las elecciones de 2009, daba un espaldarazo a su principal aliado en el bloque de derecha. A cambio se aseguraba su apoyo para que el TSE no aprobara el voto residencial y, además, pospusiera la discusión de otros importantes temas electorales, como la regulación de las campañas, el financiamiento de los partidos y la independencia partidaria del TSE. Viejas prácticas quedaron, pues, aseguradas, al igual que el maridaje entre PCN-PDC-Arena, que tan buenos frutos le ha dado a este último partido. De este modo, estaban dadas las condiciones para que el presidente Saca hiciera un llamado por una “derecha unida”, para “combatir al FMLN en 2009”²³. Esto no quería decir, en la óptica de Arena, que se estuviera pensando en forjar algún tipo de coalición de derecha para las elecciones, sino que el PCN y el PDC debían hacer lo que estuviera a su alcance para no drenar votantes a Arena —por ejemplo, llevando como candidatos a la presidencia a figuras como Wilfredo Salgado o Arturo Zablah—. Este propósito se hizo evidente hacia septiembre, cuando Arena —una vez que descartó ceder algún espacio de decisión al PCN en una eventual fórmula electoral— perfiló con claridad —a través del presidente Saca— el discurso de compromiso social que articularía la campaña política en ciernes. Y

20. Cfr. FMLN, “Antonio Saca: tres años de mentiras, pobreza, inseguridad ciudadana y un modelo económico que agoniza”, 1 de junio de 2007. Disponible en <http://fmln.org.sv/FMLNcensurado.pdf>.

21. Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), “Presidente Saca: ¿y las víctimas?”, *Proceso*, 1244, 6 de junio de 2007, p. 16.

22. Cfr. “Elecciones separadas y voto residencial”, *Proceso*, 1246, 20 de junio de 2007, pp. 4-5.

23. “Los cálculos de los partidos políticos”, *Proceso*, 1248, 4 de julio de 2007, p. 5.

cuando el año estaba por finalizar (el 6 de diciembre), Arena, PCN y PDC aprobaron un conjunto de reformas electorales que, lejos de apuntar a un avance en el fortalecimiento de la democracia, pusieron de manifiesto los deseos de la derecha por mantener su cuota de poder a toda costa. La reforma que más suspicacia despertó es la que eliminó la necesidad del sello y la firma del presidente de la Junta Receptora de Votos en cada papeleta²⁴.

1.3.3. El FMLN toma la iniciativa y Arena responde

A lo largo de 2007, los movimientos políticos del FMLN fueron claves en el posicionamiento de Arena. En efecto, una primera iniciativa preelectoral del partido de izquierda la constituyó su documento “Diálogo social abierto”, divulgado a mediados de septiembre y con el cual daba por iniciado un “proceso de consulta y discusión entre el partido político y todos aquellos actores que deseen opinar, comentar, debatir y criticar la referida propuesta”²⁵. Con el diagnóstico y propuesta recogidos en el documento, el FMLN no solo se ponía en sintonía con un malestar generalizado por la situación del país —malestar del que también se hizo cargo en esos momentos Arturo Zablah²⁶ con su “Alianza para el cambio: hacia el desarrollo sostenible en El Salvador”, divulgado el 10 de septiembre—, sino que hacía suyos temas que Arena siempre había considerado propios. El FMLN denominó a su iniciativa “Programa de las alegrías, las libertades y la seguridad compartidas”. Posteriormente, el partido de izquierda realizó su jugada más audaz: hizo públicos los nombres de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República:

Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, respectivamente.

La elección de Funes supuso no solo contar con un candidato competente, sino con la capacidad de llevar adelante una campaña atractiva y de contenidos, teniendo para ello suficiente tiempo por delante. En el FMLN, el tema de las candidaturas siempre había sido un problema no solo por las pocas opciones a su interior —centradas en sus líderes históricos—, sino también por las ansias de protagonismo de quienes se consideraron los depositarios de los destinos del partido (y, por extensión, del país). Contrario a otras ocasiones, esta vez el asunto se resolvió con facilidad, y ello le permitió al FMLN reservar energías para dedicarse a preparar sus cartas electorales. Y es que cabe suponer que, para el FMLN, Funes reúne las condiciones para articular un programa de gobierno razonable —incorporando distintos insumos de análisis económico, político, social, cultural o medioambiental que ya se han elaborado o que puedan elaborarse antes de las elecciones— y para promocionarlo mediáticamente sin la necesidad de grandes recursos publicitarios, sino solo contando básicamente con sus habilidades de comunicador. De ese modo, el FMLN aseguraba —según sus cálculos— el apoyo de un electorado más moderado y hasta cierto punto proclive al centro izquierda, pero no a las posturas duras de la izquierda tradicional. Mejor aún, Funes podría atraer a aquellos sectores sociales descontentos con Arena, pero no dispuestos a arriesgarse con un candidato de izquierda que diera señales de pretender mover al país hacia situaciones de cambios drásticos y conflictivos. Sánchez Cerén, por su parte, aseguraba la unidad del partido, así como la lealtad de quienes no

24. Otras reformas aprobadas fueron las siguientes: las papeletas que sean marcadas más allá de los límites de una bandera serán sometidas al escrutinio de las autoridades para que éstas establezcan su validez; se exigirán más requisitos para la inscripción de nuevos partidos y candidatos a alcaldes y diputados; cierre de cambios de domicilio hasta un año antes de los comicios; y conformación de las Juntas Electorales Departamentales y Municipales por parte del TSE. Cfr. Valencia, D., “Bloque de derecha aprueba reformas electorales”, *El Faro*, 10-16 de diciembre de 2007.

25. “El ‘diálogo social abierto’ del FMLN”, *Proceso*, 1258, 19 de septiembre de 2007, p. 4.

26. Y también el semanario *Proceso*. Cfr. “Reflexiones sobre la situación del país en el momento actual”, *Proceso*, 1259, 26 de septiembre de 2007, pp. 2-4.

pudieran ver con buenos ojos a un candidato a la presidencia foráneo²⁷.

Arena no tardó en acomodar sus piezas, buscando un fuerte impacto mediático²⁸. Por un lado, desde el partido de derecha se respondió a la jugada del FMLN con la auto-denominación de Vilma de Escobar —actual vicepresidenta de la República— y René Figueroa —actual ministro de Seguridad y Justicia— como posibles candidatos a la presidencia de la República. Según ambos afirmaron en su momento, lo hicieron obedeciendo a motivaciones personales. Es probable, sin embargo, que se tratara de un golpe de mano de Arena, destinado a restar prensa a los dos candidatos efemelenistas. Esta sospecha se hizo más firme al tomar en cuenta que poco después tanto Figueroa como De Escobar cesaron en su empeño. Pero eso no fue todo: casi paralelamente a lo anterior, en Arena se relanzó el discurso de compromiso social con el que el presidente Antonio Saca inició su mandato y que, usado en las elecciones de 2006 con la promoción de la Red Solidaria, no dejó de tener una importante rentabilidad electoral.

Pensando en las elecciones de 2009, Saca pronunció el 11 de octubre un discurso²⁹ dirigido, en primer lugar, a los sectores sociales urbanos, ante los cuales se comprometió a mantener el subsidio del gas propano, así como a congelar las tarifas de energía eléctrica durante un período de seis meses; y, en segundo lugar, a los sectores laborales, a los que les ofreció un aumento salarial en dos fases: una a finales de 2007 y la otra a finales de 2008. El presidente Saca no desaprovechó la oportunidad para hacer ver esas medidas como otra muestra más de la preocupación social de su gobierno, comprometido, esta vez, con “proteger el bolsillo de las familias trabajadoras”. De más está

decir que no era ese el objetivo de las medidas anunciadas el 11 de octubre. Si así hubiera sido, Saca se hubiera comprometido no a mantener estables las tarifas de electricidad, sino a efectuar una reducción significativa de las mismas; o, en el caso de su oferta de aumentar los salarios, hubiera presentado una propuesta definida de incrementos salariales —acorde con el alto costo de la vida— a ser implementada inmediatamente³⁰. A su vez, tuvo que haber añadido medidas como la eliminación del IVA a las medicinas y a la canasta básica, la reducción de las tarifas en el transporte público, y el control y congelación de los precios de los granos básicos.

El propósito de las medidas anunciadas era otro, de carácter político: establecer un punto de apoyo para la campaña electoral de Arena en la ruta hacia 2009. Y este punto de apoyo no es otro que la retórica del compromiso social. Es decir, Arena encaró el desafío de las candidaturas lanzado por el FMLN con el afianzamiento del eslogan que afirma que lo social es la prioridad del Gobierno, dejando para después la nominación de sus candidatos. La proclamación oficial de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén (en un acto masivo que se celebró el 11 de noviembre en el Estadio Cuscatlán) puso a prueba la determinación del partido oficial de mantener en suspenso los nombres de sus candidatos. Al momento de terminar de redactar la presente sección de este balance de 2007, Arena se mantenía firme en su postura³¹, optando en cambio por la descalificación de la fórmula efemelenista, así como por una campaña sucia llevada adelante por una organización fantasma que dirigió su mensaje principalmente a la juventud.

Por último, ¿qué decir de los demás partidos? Sencillamente, al cierre de octu-

27. Cfr. “El cálculo del FMLN”, *Proceso*, 1260, 3 de octubre de 2007, pp. 2-3.

28. Cfr. “Campaña electoral en ciernes”, *Proceso*, 1263, 24 de octubre de 2007, pp. 2-3.

29. “Discurso del Presidente de la República Antonio Saca sobre algunas medidas económicas para los próximos meses”, *Proceso*, 1262, 17 de octubre de 2007, pp. 15-16.

30. Dos semanas después, el Consejo Nacional de Salario Mínimo anunció los aumentos que se harían: 10% (repartido en dos años) para la industria, los servicios y la agricultura; y 4% (repartido en dos años) para la maquila.

31. De hecho, según *La Prensa Gráfica*, en su edición del 13 de noviembre de 2007, Arena tendría previsto nombrar a sus candidatos hasta mayo de 2008. Esta información se insertó en el marco de la presentación

bre todavía no entraban de lleno al ruedo político-electoral. Y ello porque sus dirigencias, sabedoras de que tienen pocas opciones ante Arena y el FMLN en la elección presidencial, terminaron por aceptar que no les quedaba otra alternativa que emplearse a fondo en las elecciones municipales y legislativas. Pero en estos ámbitos lo que se tuvo —salvo en los casos de Arena y el FMLN, principalmente para la alcaldía de San Salvador— no fue un debate acerca de las candidaturas o la estrategia de campaña, sino algo más básico: la preocupación de las cúpulas partidarias por la solidez de las redes de apoyo locales, cuya lealtad es clave para, al menos, asegurar la supervivencia política en 2009.

En definitiva, al cierre de 2007, el ámbito político estuvo marcado por una campaña electoral anticipada, en la cual Arena y el FMLN hicieron apuestas que —desde sus propios cálculos— los conducirán directo al control del Ejecutivo. Sin embargo, queda bastante camino que recorrer todavía, de aquí a 2009, como para que cualquiera de ellos dé por seguro su éxito electoral. Todo va a depender de cómo se posicionen los distintos sectores de la sociedad ante los candidatos, las plataformas, la propaganda, los chantajes y los juegos de imágenes mediáticos. En este escenario dominado por lo político-partidario, otros temas relevantes pasaron a segundo plano. Entre estos, tres asuntos relacionados con la política exterior del gobierno salvadoreño.

En primer lugar, el Gobierno tomó la decisión de trasladar la embajada salvadoreña en Israel de Jerusalén a Tel Aviv, lo cual fue confirmado el 24 de agosto por el canciller Francisco Laínez. Según el funcionario, el cambio no afectaría las relaciones entre El Salvador e Israel, aunque el gobierno israelí no ocultó su desilusión por la medida adoptada. Según El Faro, en la ciudad de Gaza, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Tahir al Nono, expresó que la decisión salvadoreña “confirmaba los

derechos palestinos sobre Jerusalén como una ciudad palestina y árabe”. En segundo lugar, tuvo poca prensa la reacción salvadoreña ante la decisión de Costa Rica —anunciada el 7 de junio— de romper relaciones diplomáticas con Taiwán, para abrirse a una relación diplomática con la República Popular de China. El canciller Laínez insistió en que El Salvador respetaba esa disposición costarricense, pero aseguró que el país “continuará apoyando a Taiwán”. “Tenemos 66 años de relaciones bilaterales armoniosas de amistad y de cooperación con ese país amigo y no hemos considerado romper nuestras relaciones diplomáticas”, dijo el Canciller. Y, en tercer lugar, poca atención se puso a los avatares que acompañaron a la petición salvadoreña de extender por quinta ocasión el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de salvadoreños ilegales en EE. UU. A este respecto, frente a una propuesta hecha por el presidente George W. Bush para legalizar a millones de inmigrantes indocumentados que residen en el país norteamericano, el Senado pospuso cualquier decisión o debate sobre el tema hasta después de las elecciones presidenciales de 2008. En respuesta a ello, el canciller Laínez aseguró que “hicieron todas las gestiones posibles para incentivar el debate migratorio en el seno del Congreso de los Estados Unidos”, y que se seguirán haciendo “todos los esfuerzos que sean necesarios para que el tema sea considerado nuevamente, a su debido tiempo”.

2. Ámbito económico

Ciertamente, no todos los problemas en El Salvador son de naturaleza económica, pero los más graves y profundos sí tienen que ver directamente con ella. En este sentido, no puede obviarse la desarticulación estructural entre los tres sectores económicos salvadoreños fundamentales, es decir, entre la agricultura, la industria y los servicios. A un agro en crisis se une un sector industrial estancado, que pone de manifiesto el agotamiento del

de los resultados de una encuesta de LPG Datos, que daba una leve ventaja en las preferencias electorales a Arena (28.1%) sobre el FMLN (25.5%), a nivel de elección presidencial.

modelo económico implantado a partir de los años sesenta, y que ha sido reemplazado por uno centrado en los servicios (finanzas, turismo y comercio), la actividad maquilera y las remesas familiares. En 2007, esa desarticulación estructural del modelo económico se profundizó, dando lugar a un conjunto de dinamismos económicos específicos que la expresan y que solo adquieren sentido en su relación con ese contexto problemático más amplio. A continuación se reseñan algunos de esos dinamismos, particularmente aquellos que estuvieron presentes en el debate público en el transcurso del año.

2.1. Principales desafíos

A inicios de 2007, en el semanario *Proceso*³² se presentaron sintéticamente algunos de los desafíos económicos que aparecían en el horizonte del país en esos momentos. En conjunto, se partió de reconocer que la mayoría de salvadoreños atravesaba una difícil situación económica. La inflación, los bajos salarios y la poca rentabilidad de las micro-pequeñas empresas, donde trabaja la mayor parte de la fuerza laboral, eran una prueba de ello. A lo anterior se añadía la escasez de recursos estatales para enfrentar las necesidades en las áreas de educación, salud y seguridad. Se trataba, sin duda, de un panorama desalentador para el año nuevo, pero que podría ser distinto “si el Gobierno y la élite empresarial estuvieran dispuestos a cambiar la estrategia de crecimiento y desarrollo económico. En otras palabras, si aceptan la necesidad de establecer un nuevo modelo de crecimiento”³³.

Así, un primer desafío identificado por *Proceso* estribaba en impulsar una nueva estrategia de crecimiento, lo cual suponía un cambio importante en la mentalidad de los dirigentes políticos, así como de los grandes empresarios “convencidos de que el modelo económico vigente es muy bueno, ya que ha permitido el

incremento de las ganancias de sus empresas junto al aumento de sus activos bancarios”³⁴. Esa nueva estrategia de crecimiento debía estar sustentada en una visión de país nacida de un consenso sobre sus problemas más graves en el presente y sobre sus perspectivas futuras. De esta visión podrían desprenderse medidas económicas más concretas, pero también decisiones sociales, culturales y políticas. Y es que si algo debía estar claro era que los problemas económicos del país no se resolverían solo con mejoras en los niveles de productividad y competitividad, sino que era necesaria la intervención política, pues importantes decisiones económicas (reformas a leyes económicas, cambios en la organización de las instituciones, nuevas normas que promuevan la eficiencia, etc.) requerían de la aprobación y/o participación de la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.

De forma más puntual, un segundo desafío apuntaba al área fiscal. En este punto, se hacía necesario un pacto fiscal que financiara el desarrollo a largo plazo.

Un pacto fiscal [que] difiere de la estructura tributaria que fue impuesta por el Ejecutivo a principios de los noventa. El sistema tributario actual tiene sus raíces en la financiación de la mayor parte de los gastos estatales mediante impuestos indirectos. Ello redujo la presión tributaria sobre la renta y las ganancias de capital, ya que se esperaba que las mismas pudieran utilizarse en la inversión productiva. Con la medida, los empresarios podían destinar más recursos a la reinversión y generar mayor crecimiento económico.³⁵

Ante la ausencia de un pacto fiscal, los sectores sociales de más bajos ingresos terminan financiando los gastos estatales a la espera de que el crecimiento económico por la reinversión de las utilidades de las empresas se traduzca en mejores salarios. Pero el crecimiento esperado no llega ni tampoco llegan los mejores salarios.

32. *Cfr. Proceso*, 1224, 10 de enero de 2007.

33. “Desafíos económicos para 2007”, *Proceso*, 1224, 10 de enero de 2007, p. 6.

34. *Ibidem*.

35. *Ibidem*.

Ante ello, se impone la necesidad de

un compromiso nacional en el que se establezca cómo se financiará el desarrollo. Una nueva estructura tributaria no debe frenar el proceso de acumulación de capital, pero tampoco puede basarse en el aumento de impuestos indirectos, ya que esto afecta a los sectores sociales de más bajos ingresos. En este sentido, un pacto fiscal es una alternativa a estos dos extremos.³⁶

Un tercer desafío tenía que ver con el fortalecimiento de las instituciones económicas del Estado. La Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia del Sistema Financiero, y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberían velar por el fiel cumplimiento de las leyes y normas que regulan las actividades económicas. Según *Proceso*,

en el marco de la difícil situación económica que tiene el país, no se deben permitir los abusos de las empresas sobre los consumidores ni tampoco los abusos de los patronos sobre los trabajadores. Sancionar a las empresas que especulan con los precios es tan importante como castigar a aquellos patronos deudores de recursos a las AFP después que éstos han sido descontados de los salarios de sus trabajadores.³⁷

Un cuarto desafío consistía en frenar el proceso de concentración del ingreso nacional. Y ello porque el modelo económico terciarizado ha facilitado el incremento de los ingresos de las élites económicas a costa del bienestar de la mayoría de la sociedad. Un buen comienzo, por tanto, era la promoción gubernamental de las micro y pequeñas empresas, sector que constituía la mayor parte del parque empresarial del país. Asimismo, la introducción de cambios en estas unidades productivas beneficiaría a muchos salvadoreños en tanto que muchas de ellas son de tipo familiar. En estas empresas labora la mayor cantidad de fuerza de trabajo, por lo que mejores niveles de ren-

tabilidad empresarial podrían elevar la calidad de vida de los trabajadores en general³⁸.

Un quinto desafío era propiciar políticas de género relativas a los derechos económicos de las mujeres; políticas que debían ayudar a contrarrestar la concentración del ingreso.

La mayor parte de la fuerza de trabajo que labora en los sectores formal e informal está constituida por mujeres; no obstante, en los diversos sectores económicos, son ellas las que tienen más bajos ingresos. Este problema se presenta tanto en los trabajadores con formación cualificada que laboran en el sector formal como en aquellos dedicados al comercio informal. Existe una gran cantidad de mujeres que tienen menores salarios que sus compañeros de trabajo hombres, a pesar de que ellas cuentan con el mismo nivel de formación educativa e igual productividad.³⁹

Un sexto desafío se enfocaba en el área productiva, concretamente en la necesidad de promover el desarrollo y el fortalecimiento de la industria. Ya se ha dicho, pero vale la pena insistir en ello: el actual modelo económico beneficia el crecimiento de los sectores comercio y servicios, pero no beneficia la producción y la exportación de manufacturas. Para enfrentar este problema había que establecer una política de organización industrial y lograr una articulación productiva que concatenara varios sectores para que los bienes elaborados poseyeran mayor valor agregado.

Debido a su bajo nivel de desarrollo, el sector industrial no es capaz de proporcionar la mayor parte de manufacturas necesarias en el mercado local, por lo que se recurre a satisfacer la demanda interna mediante importaciones. Si la meta es exportar bienes manufacturados con alto valor agregado, hay que fortalecer la producción industrial nacional mediante un aumento de la demanda interna. Es irónico pensar en la exportación de bienes manufacturados cuando dichos bienes aún no se comercializan en el mercado interno.⁴⁰

36. *Ibidem*.

37. *Ibid.*, pp. 6-7.

38. *Ibidem*.

39. *Ibidem*.

40. *Ibidem*.

Una política agresiva para el desarrollo de la industria exigía —se sostuvo desde *Proceso*— evaluar los efectos de la dolarización en el sector exportador, aunque esto genere malestar en los empresarios del sector financiero. Y es que al observar el comportamiento de los diversos sectores, se podía notar un mayor dinamismo en la banca a costa del estancamiento de la industria y la reducción de la competitividad en las exportaciones. No se trataba de modificar el esquema cambiario, sino más bien de impulsar medidas compensatorias para que dichos sectores pudieran crecer en base a mejoras en la productividad.

En resumen, según *Proceso*, el mayor desafío para 2007 era la revisión de la estrategia de crecimiento económico implementada desde 1989. Y ello porque

si el verdadero interés del Gobierno es mejorar el rendimiento de todos los sectores económicos y la calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas, habrá que introducir reformas profundas al modelo actual [... Pero] para que la reforma económica tenga éxito es necesario que esté cimentada en consensos que involucren a todos los sectores sociales. Lo ideal es que el crecimiento y el desarrollo económico estén acompañados por la consolidación de la democracia.⁴¹

2.2. La apuesta por la misma estrategia de crecimiento

Al iniciar el año eran claros los desafíos económicos que había que enfrentar si se quería encauzar el rumbo del país por unos derroteros distintos a los ya recorridos. Pero a finales de 2007 ya se contaba con un conjunto de evidencias que permitían afirmar con contundencia que el principal reto (impulsar una nueva estrategia de crecimiento) no fue abordado como era debido; es decir, se siguió apostando, desde el Gobierno y desde el sector empresarial, por una estrategia de crecimiento anclada en el sector terciario, lo cual dejó su huella en los principales dinamismos económicos que se suscitaron a lo largo del

año. Esta apuesta se vio reflejada, en primer lugar, en el desempeño de los sectores agrícola e industrial; en segundo lugar, en el crecimiento de las remesas y, en menor medida, de la maquila; en tercer lugar, en el auge del turismo, promovido de diversas maneras por el gobierno del presidente Antonio Saca; y, en quinto lugar, por las opciones presupuestarias y fiscales del Gobierno. Cabe señalar que la apuesta por mantener la misma estrategia de crecimiento se realizó en un entorno complicado: a nivel nacional, debido, en parte, a la presión ejercida por la oposición política que, al igual que Arena, tiene la vista puesta en las elecciones de 2009; a nivel internacional, por el aumento en los precios del petróleo, lo cual —sumado a la discrecionalidad de las distribuidoras de combustibles— acentuó los impactos negativos del modelo económico terciarizado sobre la población.

Desde la perspectiva del crecimiento económico, el primer trimestre de 2007 cerró con malos augurios. Y es que, durante la segunda semana de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó para 2007 un menor crecimiento con respecto a 2006. Voceros del FMI aseguraron que la economía salvadoreña crecería solo un 4%, lo que significaría un decrecimiento comparado con la tasa de 4.2% obtenida en 2006. Inmediatamente, desde el Gobierno y la empresa privada se afirmó que era muy pronto para determinar la tendencia que tendría la economía y que se confiaba en que factores como el Tratado de Libre Comercio con EE. UU., el crecimiento del turismo y el crecimiento de las exportaciones no tradicionales permitirían mejores resultados que los de 2006. En esa oportunidad, el Gobierno proyectó que la economía crecería entre un 4.5% y un 5% en 2007⁴². Este optimismo se vio reflejado en la relativa euforia con la que, desde el Gobierno, se celebró el primer año de la implementación del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. A este respecto, el gabinete económico ofreció un informe en el que se

41. *Ibidem*.

42. Cfr. "Crónica del mes. Marzo-abril", *ECA*, 701-702, marzo-abril de 2007, p. 342.

Cuadro 1
Índice del volumen de la actividad económica (IVAE) (Base 1990=100)
Tendencia de ciclo (2006-2007)

Ramas de actividad	Ago. 2006		Ago. 2007 ¹	
	Índice	Var. anual	Índice	Var. anual
Índice general	198.60	3.51	206.76	4.11
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	114.62	3.57	123.26	7.54
Explotación de minas y canteras	210.36	16.58	197.68	-6.03
Industria manufacturera	219.35	-1.45	220.41	0.48
Electricidad, gas y agua	228.38	9.62	235.12	2.95
Construcción	187.35	2.87	184.97	-1.27
Comercio, restaurantes y hoteles	206.70	3.40	214.67	3.86
Transporte, almacenaje y comunicaciones	308.22	7.18	339.54	10.16
Bancos, seguros y otras instituciones financieras	459.34	16.11	506.94	10.36
Bienes inmuebles y servicios prestados a empresas	177.69	8.71	187.98	5.79
Servicios comunales sociales y personales	152.30	3.28	158.23	3.89
Servicios del gobierno	122.08	4.47	122.59	0.42

¹ Cifras revisadas a junio de 2007.

Fuente: Departamento de Cuentas Macroeconómicas, Banco Central de Reserva (BCR).

insistió en que el tiempo transcurrido desde la implementación del TLC era muy corto, lo cual imposibilitaba valorar los resultados del tratado. Sin embargo, se aseguró que la tasa de crecimiento de 4.2% correspondiente a 2006 había recibido un impulso desde la suscripción del TLC. Recurriendo a estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), voceros oficiales destacaron un incremento de las exportaciones en un 68% (sin incluir al sector maquilero, que había registrado una fuerte caída frente a la competencia asiática⁴³). En este sentido, el crecimiento anunciado por el Gobierno se centró en el auge de los productos no tradicionales, favorecidos por el TLC. Aunque la reducción de las exportaciones totales, aunado a un crecimiento de cerca del 23% de las importaciones desde el país norteamericano, contribuyó a mantener el déficit comercial con EE. UU., que, para 2006, correspondió al 14%.

Transcurrida la primera mitad del año, llegó el momento de hacer las evaluaciones pertinentes sobre el desempeño económico durante el primer semestre de 2007. Por el lado del Gobierno, el presidente Antonio Saca presentó, junto al gabinete económico, el informe sobre el crecimiento económico en el período⁴⁴, en el cual auguró, a partir de estimaciones positivas, que El Salvador podría crecer un 5% para finales de 2007. Tomando en cuenta que a finales de 2006 el país registró, según datos oficiales, la cifra más alta de crecimiento económico durante la última década, Saca afirmó que el país mantenía el nivel de crecimiento proyectado, basado en el aumento en la recaudación fiscal y un crecimiento en los depósitos y el crédito para apoyar la actividad económica nacional. Asimismo, aseguró que la proyección de su gobierno era cerrar el año 2009 con una deuda cercana o menor al 36% en relación al PIB, incluyendo la deuda previsional.

43. De hecho, al incluir los resultados negativos de este sector, cuyas exportaciones cayeron en un 11.7%, la cifra de las exportaciones totales de El Salvador hacia EE. UU. realmente decreció en un 2%.

44. Gobierno de El Salvador, *Informe Económico. Primer Semestre 2007*, 20 de agosto de 2007.

Cuadro 2
Producto interno bruto trimestral, por principales divisiones (en millones de dólares)
(2006-2007)

Principales divisiones	2006 ¹				2007 ¹	
	1er. trim.	2º trim.	3er. trim.	4º trim.	1er. trim.	2º trim.
Agricultura, caza, silvicultura y pesca	450	456	473	496	498	498
Industria manufacturera y minas	958	974	985	992	1,014	1,042
Electricidad, gas y agua	87	87	87	89	93	92
Construcción	222	196	174	187	222	196
Comercio, restaurantes y hoteles	903	922	936	941	983	998
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	410	420	445	451	455	453
Establecimientos financieros y seguros	203	207	212	215	219	223
Bienes inmuebles y servicios prestados a empresas	186	189	193	198	204	206
Alquileres de vivienda	310	325	336	351	323	339
Servicios comunales, sociales, personales y domésticos	330	337	342	349	354	361
Servicios del Gobierno	300	304	311	315	329	333
Menos: servicios bancarios imputados	169	173	176	179	182	186
Más: otros elementos del PIB	360	365	381	393	414	414
Producto interno bruto trimestral	4,548	4,608	4,699	4,799	4,925	4,968

¹ Cifras preliminares.

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR).

Por su parte, el Banco Central de Reserva anunció un crecimiento del 7.7% en la entrada de remesas durante el primer semestre de año, en comparación con el mismo período del año anterior. De enero a julio de 2007, El Salvador recibió 2,042.4 millones de dólares, cifra que superó en 146.7 millones de dólares al monto registrado en los primeros siete meses de 2006. Y desde el Ministerio de Economía se informó que las exportaciones no tradicionales habían permitido que las ventas al exterior crecieran un 4.7% en comparación con 2006. Siempre desde esta cartera de Estado se sostuvo que el número de desempleados había caído, en ese primer semestre, en 6.6%, mientras que el número de empleos, tomando como referencia a los afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), habría registrado un incremento del 7.1% hasta mayo.

Lo anterior permitió al presidente Saca no solo insistir en que El Salvador era uno de los países más atractivos para invertir, sino en defender la idea de que el tratado de libre comercio firmado recientemente con Taiwán traería consigo importantes logros, como la exportación de tres mil toneladas de azúcar en tres años, cifra que duplica la que se envía a los EE. UU. Saca añadió, además, que el país se encontraba en el cuarto lugar a nivel centroamericano en el tema de combate a la corrupción, lo cual, sumado a otros atractivos —como su ubicación geográfica, los bajos costos para negociar y la economía que posee—, lo convertía en un sitio privilegiado para atraer inversiones. En la misma línea del presidente Saca se situó Fusades, que presentó su informe económico del segundo trimestre del año, en el cual confirmó la tendencia hacia el crecimiento de la economía

Cuadro 3
Balanza comercial acumulada anual y mensual (en millones de dólares)
(2002-septiembre de 2007)

Concepto	2002	2003	2004	2005 ¹	2006 ²	Sep-07 ²
I. Exportaciones FOB	2,995	3,128	3,305	3,387	3,513	2,978
Tradicional	161	163	166	233	263	237
Café	107	105	123	164	189	168
Azúcar	44	47	37	67	72	69
Camarón	9	11	5	3	2	0
No tradicionales	1,077	1,092	1,216	1,339	1,649	1,397
Centroamérica	740	746	821	913	1,027	868
Resto del mundo	337	346	395	426	621	529
Maquila	1,757	1,873	1,923	1,815	1,602	1,344
II. Importaciones CIF	5,184	5,754	6,329	6,834	7,628	6,224
Bienes de consumo	1,363	1,589	1,784	2,088	2,405	1,985
No duraderos	1,179	1,317	1,448	1,756	1,961	1,581
Duraderos	184	272	336	332	444	404
Bienes intermedios	1,659	1,849	2,096	2,328	2,798	2,323
Industria manufacturera	1,283	1,444	1,629	1,828	2,238	1,851
Agropecuario	89	96	117	145	136	143
Construcción	226	249	290	300	389	302
Otros	62	60	61	56	35	26
Bienes de capital	879	936	990	1,015	1,221	1,009
Industria manufacturera	252	269	258	282	348	312
Transporte	349	388	437	418	446	414
Agropecuario	14	13	45	16	18	15
Construcción	82	80	60	64	81	60
Comercio	95	109	107	120	140	85
Electricidad, agua y serv.	54	40	47	72	133	94
Otros	34	37	36	43	55	30
Maquila	1,283	1,379	1,458	1,403	1,204	908
III. Balanza comercial	-2,189	-2,626	-3,024	-3,448	-4,114	-3,246

¹ Cifras revisadas.

² Cifras preliminares.

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR).

y que la actividad productiva de sectores como la industria, la construcción y las ventas mostraba mejorías. Fusades también destacó la solidez del sistema financiero y una mayor

recaudación fiscal como avances importantes en el primer semestre del año.

Sobre el último aspecto, la institución instó a mantener la recaudación por encima del

14% del PIB para un equilibrio en la deuda, al tiempo que destacó el buen resultado de las exportaciones (sobre todo, de las no tradicionales), la internacionalización de la banca, la caída en el desempleo, una menor inflación y un aumento en la carga tributaria que, de acuerdo a esta entidad, se acercó en el período al promedio de América Latina. Con todo, a diferencia del informe oficial sobre la economía del país, Fusades percibió algunas “amenazas” para la economía, entre ellas la delincuencia

(que estaría afectando a un 25% de los empresarios), los altos costos de producción —como consecuencia del alza del petróleo— y la crisis inmobiliaria estadounidense. En definitiva, Fusades reconoció que, aunque la economía iba por buen camino y la inflación había disminuido en un 3.1%, la población no terminaba de percibir esos efectos positivos, fundamentalmente porque, en términos de precios y costos, la canasta básica, tanto rural como urbana, mostraba tendencias encontradas.

Cuadro 4
Inversión extranjera directa por sector económico (2005-marzo de 2007)
Saldos anuales y acumulados (en millones de dólares)

Sector	2005	2006	Marzo 2007
Industria	853.5	870.1	858.3
Comercio	305.0	352.8	353.8
Servicios	125.2	134.2	150.5
Construcción	12.4	12.4	12.4
Comunicaciones	793.8	793.9	801.2
Electricidad	800.2	847.6	847.6
Agricultura y pesca	67.1	67.7	67.7
Minas y canteras	1.5	29.5	32.2
Financiero	250.4	345.1	348.9
Maquila	298.9	298.5	301.3
Subtotal	3,508.1	3,751.8	3,773.9
Préstamos entre empresas	752.7	713.0	723.9
Total	4,260.8	4,464.8	4,497.8

Fuente: Banco Central de Reserva (BCR).

De hecho, las diferencias de Fusades con el Gobierno —siempre caracterizadas por los matices y los énfasis oportunos— habían salido a relucir antes de que el presidente Saca rindiera su informe económico del segundo semestre de 2007. En su documento *Respondiendo a los desafíos fiscales en El Salvador*, luego de reconocer que el país avanzaba por el camino correcto en cuanto al manejo de sus finanzas, Fusades recordó que, en 2006, se recaudó en impuestos el equivalente al 13.4% del PIB, es decir, unos \$2,488 millones, debido a la reforma fiscal y a la creación del fideicomiso de pensiones que reprogramó a futuro el pago de las mismas. Sin embargo, Fusades señaló que existía la percepción de que en El Salvador la

carga tributaria era todavía baja en comparación con los estándares internacionales. En tal sentido, la institución consideró factible que el Gobierno destinara un 1% adicional del PIB al año, es decir, alrededor de \$200 millones, al financiamiento de las políticas públicas —principalmente hacia aquellas enfocadas a salud y educación— sin que ello ocasionara un desequilibrio en las cuentas fiscales.

De cierta forma, Fusades estaba insinuando una de las grandes fallas de la apuesta del gobierno de Saca por el crecimiento económico: la incapacidad para atender los graves problemas sociales que afectan a la mayor parte de salvadoreños. Es decir, la esterilidad

Cuadro 5
Inflación: índice de precios al consumidor (base diciembre de 1992=100)
Variación mensual (2000-septiembre de 2007)

Mes	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Enero	0.7	1.8	1.2	1.2	1.1	1.4	0.5	1.2
Febrero	0.5	-0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.5	-0.2
Marzo	0.1	0.2	0.6	0.3	0.6	0.1	0.4	0.6
Abril	0.1	0.1	0.4	0.0	0.8	0.5	0.7	0.1
Mayo	0.6	0.2	0.0	-0.1	0.7	0.7	0.1	-0.4
Junio	1.1	0.1	0.6	0.3	0.2	0.0	0.8	0.7
Julio	-0.1	0.0	0.2	-0.4	0.3	0.2	1.3	0.7
Agosto	0.4	0.3	-0.4	0.3	0.2	0.3	-0.5	-0.1
Septiembre	0.2	0.0	-0.4	0.1	0.2	0.4	0.0	0.7
Octubre	0.0	-0.9	0.1	0.3	0.4	1.9	-0.4	—
Noviembre	0.2	0.9	-0.2	0.1	0.0	-1.3	0.6	—
Diciembre	0.5	-1.1	0.3	0.2	0.2	-0.1	0.9	—

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).

de un crecimiento económico anclado en los servicios financieros, el comercio, las remesas y el turismo. Pese a lo anterior, el Gobierno continuó comprometido con ese estilo de crecimiento económico. Y, a las puertas del último trimestre del año, propuso a la Asamblea Legislativa la Ley de Servicios Internacionales. Ésta fue aprobada el 12 de octubre con los votos de Arena, PCN y PDC, y con ella se pretendía dar un nuevo impulso a la entrada de inversiones a El Salvador, destinadas al desarrollo del turismo.

Tal como se señaló en *Proceso*, la Ley de Servicios Especiales fue impulsada por el Ejecutivo en respuesta a

la reducción en los niveles de inversión extranjera en los últimos años. Debido a los altos costos de transacción que suponen el sinnúmero de trámites para establecer una empresa y el aumento en los costos de operación por el auge delincencial, el Gobierno ofrece exenciones fiscales a los inversionistas foráneos para volver más atractivo al país en el ámbito de los

negocios internacionales [...] La nueva Ley de Servicios Internacionales y los fideicomisos de pensiones y de educación son nuevas alternativas de inversión para que los grandes empresarios nacionales e internacionales aumenten sus capitales. El mayor éxito del partido oficial consiste en hacer creer a la población que tales medidas son las más adecuadas para enfrentar las necesidades del país en torno al empleo, pago de pensiones y gasto en educación. Sin embargo, en el fondo, son instrumentos gubernamentales muy valiosos para aumentar las ganancias de los grandes inversionistas afines al partido oficial.⁴⁵

2.3. Los límites de la apuesta gubernamental

2.3.1. Los resultados del Cafta, y la política industrial

En comercio exterior, el principal logro promocionado por el Gobierno fue el aumento de las exportaciones de bienes no tradicionales; la menor dependencia de la exportación de

45. "Más regalos para los inversionistas", *Proceso*, 1258, 19 de septiembre de 2007, pp. 6-7.

productos primarios y maquila mostró una incipiente diversificación en el aparato productivo. Sin embargo, el mayor valor de las exportaciones no tradicionales no estuvo asociado a una reactivación de la industria, aun cuando gran parte de este tipo de exportaciones correspondieron a dicho sector. De acuerdo a la variación anual del índice de volumen de actividad económica (IVAE) correspondiente a febrero de 2007, el sector industrial atravesaba un estancamiento levemente superior al de 2006. A pesar de que distintos subsectores de la industria aumentaron sus ventas hacia el extranjero, dicho dinamismo no fue suficiente para generar una mayor actividad en todo el sector.

Desde una perspectiva más amplia, el repunte de las exportaciones no tradicionales no fue tan positivo, tal como se desprende al observar el saldo de la balanza comercial: las ventas al extranjero fueron mucho menores que las compras al mes de abril (\$1,381 millones). Es probable que el aumento de las exportaciones no tradicionales fuera fruto de la política industrial; no obstante, aunque hubiera sido así, dicha política no fue capaz de reactivar el sector. Es más, a las debilidades ya conocidas de la industria (bajo nivel de productividad y de organización industrial, falta de cadenas de valor, entre otros) se añadieron el contrabando y los altos precios en los servicios que son insumos en el proceso de producción (agua, electricidad, red telefónica y combustible). El alza de los costos se tradujo en un aumento de precios que restó competitividad a los bienes manufacturados.

2.3.2. Las instituciones reguladoras del mercado

Durante los tres años de gestión de Antonio Saca se crearon dos instituciones encargadas de vigilar el funcionamiento de los mercados. En términos generales, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia no cumplieron de la misma manera sus roles; las dos entidades no avanzaron ni se fortalecieron al mismo ritmo. En algunos casos, la Defensoría del Consumidor tomó una postura agresiva ante el abuso de los empresarios

sobre los consumidores, actitud que generó malestar en las gremiales empresariales. Por su parte, la Superintendencia de Competencia fue lenta en reaccionar frente a abusos semejantes. La forma de trabajo de ambas entidades dio razón de sus resultados: mientras que la Defensoría vigiló con cierta frecuencia la calidad y los precios de los bienes y servicios del mercado, la Superintendencia tardó meses en dictaminar si una empresa estaba abusando de su posición de dominio en el mercado. Es obvio que se trató de tareas distintas; pero la Superintendencia debió agilizar sus procesos para acompañar a la Defensoría en su trabajo. Ambas entidades debieron trabajar por conseguir un acervo de información que les facilitara la vigilancia de los diferentes mercados, pues, en teoría, las instituciones reguladoras del mercado tienen un rol complementario.

En 2007, destacaron las penalizaciones de la Defensoría del Consumidor sobre los empresarios que ofertaron productos vencidos durante la época de Semana Santa. Previo a la actividad de vacaciones, la entidad denunció en diciembre de 2006 a cuatro bancos por aplicar recargos por la inmovilidad de cuentas bancarias. Por su parte, la Superintendencia de Competencia, después de haber efectuado los estudios que comprobaron la zonificación de precios por parte de las empresas petroleras, decidió dar un año de prórroga para realizar más investigaciones. Mientras esto sucedía, los consumidores y los distribuidores de combustibles (gasolineras) continuaron siendo afectados por la dinámica de los precios internacionales del crudo y su manejo en el mercado local.

2.3.3. Red Solidaria y finanzas públicas

2007 fue un año de estancamiento en la política social. Red Solidaria y Caminos Rurales Sostenibles se detuvieron de manera parcial por la falta de recursos estatales. Según los planes del Gobierno, los programas serían atendidos con recursos frescos provenientes del endeudamiento público con el extranjero. No obstante, debido a la negativa del FMLN a otorgar sus votos en la Asamblea Legislativa, los empréstitos no fueron aprobados. Como

se ha señalado otras veces, el éxito del plan social del gobierno depende del cumplimiento de las metas programadas y de la eficacia en la utilización de los recursos. En este sentido, establecer una política social que carece de recursos suficientes y que depende, en última instancia, de la coyuntura política, afecta de antemano la eficacia del plan, ya que los resultados pueden que se cumplan o no en base a lo programado. Por esa razón, varios especialistas recomendaron aumentar la recaudación tributaria para enfrentar con recursos propios la política social, antes que elevar el nivel de endeudamiento externo.

Cuadro 6
Precios promedio de gasolina y diesel para el consumidor final en Centroamérica, al 2 de noviembre de 2007 (en dólares por galón)

País	Gasolina		Diesel
	Especial	Regular	
Guatemala	3.55	3.43	3.09
Honduras	3.70	3.48	3.13
Nicaragua	3.93	3.75	3.43
Costa Rica	3.94	3.83	3.36
El Salvador	3.60	3.35	3.25

Fuente: Dirección de Hidrocarburos de cada país.

A pesar del éxito en el aumento de la recaudación de impuestos —gracias a la reforma tributaria impulsada hace dos años—, el Gobierno contó con un Presupuesto que presentaba, en términos relativos, recortes importantes en el área social. El análisis macroeconómico del Presupuesto realizado por Fusades en 2006 mostró que las prioridades de inversión social en las áreas de educación, salud y desarrollo local se mantenían. Sin embargo, los montos asignados a cada uno de los rubros eran insuficientes para cumplir con los requerimientos financieros del Plan 2021 y Red Solidaria. A mediados de 2007, los recursos financieros con los que contaba

el Gobierno continuaban siendo escasos y, en consecuencia, la administración Saca planeaba nuevas medidas para financiar la política social y la de seguridad pública. Era evidente que la administración Saca había realizado una serie de cambios —reforma tributaria y reforma de pensiones— que, en términos prácticos, resultaron insuficientes para cumplir las metas establecidas por la política social.

En lo que restó de 2007, los dinamismos económicos descritos se mantuvieron prácticamente invariables. De hecho, tanto la estructura del Presupuesto del Estado para 2008 (aprobado el 1 de octubre) como el anuncio presidencial del 11 de octubre de mantener el subsidio al gas propano, congelar durante seis meses las tarifas de electricidad y aumentar en dos etapas el salario mínimo no reflejaron una alteración de las opciones del Gobierno, sino más bien su confirmación. En lo que se refiere al aumento salarial, éste no compensó el alto costo de la vida debido al incremento general de precios y a la inflación. De hecho, en noviembre, el problema de la inflación fue puesto en la mesa de discusión por Fusades.

En efecto, el 8 de noviembre, Margarita Sanfeliú, del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades, sostuvo que

la inflación acumulada a octubre es de 5.5%; en otros años ha llegado a alrededor del 4% y está afectando más la canasta alimentaria del sector rural [...] El incremento en el rubro alimenticio fue más grande que el promedio, llegando a registrar a septiembre 6.7%, considerablemente mayor que la de un año atrás (3.5%).⁴⁶

Y en su informe de coyuntura, correspondiente al tercer trimestre de 2007, la institución vaticinó que la tasa de crecimiento que registraría la economía oscilaría entre el 4% y el 4.5%, dato que difiere del 5% pronosticado por el Gobierno. Las razones esgrimidas por Fusades para su pronóstico estribaron en la desaceleración de la economía estadounidense y una mayor inflación que afectó la confianza de los consumidores⁴⁷.

46. López, S. V. y Quintanilla, L., "Inflación. Fusades preocupada por alza en precios de alimentos", *La Prensa Gráfica*, viernes 9 de noviembre de 2007, p. 2.

47. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), *Indicadores de coyuntura. Tercer trimestre 2007*, 19 de noviembre de 2007.

A diferencia de la gremial empresarial, desde el Gobierno se mantuvo una visión positiva, pues datos del BCR sugirieron que el IVAE registró un dinamismo por el auge en los sectores agropecuario, transporte, financiero, servicios y comercio. Se reconoció que la inflación aumentaba de forma clara, pero que era la más baja de la región centroamericana. Además, el crecimiento de las exportaciones de bienes no tradicionales y las importaciones de capital, junto a una mayor inversión extranjera directa y la estabilidad fiscal, apuntaban, según los funcionarios, a una expansión de la economía⁴⁸.

Por otra parte, la estructura del Presupuesto para 2008⁴⁹ —concretamente el destino del gasto— reflejó las prioridades del Gobierno para el presente año. Así, en el Presupuesto en cuestión, los gastos corrientes representaron el 68.7% de los gastos totales, de los cuales \$434.8 millones (una décima parte del Presupuesto) se destinaron al pago de intereses de la deuda pública. Además, los gastos de capital ascendieron a \$588.3 millones; el 45.8% correspondió a la inversión en activos fijos y el resto a transferencias.

El gasto total por aplicaciones financieras alcanzó los \$268.3 millones. Este monto es la suma de lo que se gastará en amortización de

la deuda externa e interna. Si a este pago por amortización se añade el gasto en intereses, los costos de la deuda pública total alcanzaron los \$703.1 millones, cifra que representó un poco más de la quinta parte del Presupuesto. Una consideración especial merece el costo previsual por el pago de pensiones. En 2008, el costo de la deuda de pensiones será de \$90 millones, cifra que es 206.1% mayor a la de 2007. En este sentido, hay que recordar que los especialistas en finanzas públicas destacaron en su oportunidad que la creación del fideicomiso de pensiones no eliminaba la deuda estatal, solo retrasaba su pago. Lo cierto es que en la medida que transcurran los años, el costo previsual aumentará cada vez más: en 2007 el Gobierno sólo pagó \$29.4 millones, pero en 2008 gastará \$60.6 millones adicionales. Asimismo, de acuerdo a la clasificación por áreas de gestión, el Presupuesto concentró la mayor cantidad de sus recursos en el desarrollo social. De los \$1,395.9 millones asignados a dicha área, \$635 millones correspondieron al ramo de educación y \$356.7 millones a salud pública y asistencia social. Ambos desembolsos representaron el 30.4% del Presupuesto del Estado. En tercer lugar se tiene el gasto para el financiamiento a los gobiernos municipales, que sumó \$203.3 millones.

Cuadro 7
Presupuesto general del Estado 2008 (en millones de dólares y porcentajes)

Área de gestión	Monto	%
Conducción administrativa	31.7	9.4
Administración de justicia y seguridad ciudadana	569.8	17.1
Desarrollo social	1,395.9	41.8
Apoyo al desarrollo económico	251.4	7.5
Deuda pública	703.1	21.0
Obligaciones generales del Estado	108.8	3.2
Total	3,342.7	100.0

Fuente: Ministerio de Hacienda de El Salvador.

48. Cfr. "Diferencias en torno al crecimiento de la economía", *Proceso*, 1266, 14 de noviembre de 2007, pp. 7-8.

49. Cfr. "Presupuesto General del Estado 2008", *Proceso*, 1260, 3 de octubre de 2007, pp. 7-8.

La deuda pública se pagaría con el 21% de los recursos del Presupuesto. Si bien en los últimos años ha existido una tendencia a la reducción de la deuda, no se debe olvidar que la emisión de títulos valores —que financian a los fideicomisos— representa gastos futuros para el Estado. Finalmente, el área de gestión que corresponde a la administración de justicia y seguridad recibió \$569.8 millones; de ellos, \$307.2 millones se destinaron al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia; \$190 millones, al Órgano Judicial; y \$28.9 millones, a la Fiscalía General de la República. Para la conducción administrativa del Estado se otorgaron \$313.7 millones. En esta área, las instituciones con mayor cantidad de recursos fueron la Fuerza Armada, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República. El apoyo al desarrollo económico, y las obligaciones generales del Estado recibieron \$251.4 millones y \$108.8 millones, respectivamente.

3. Ámbito social

En la última década, la estructura social salvadoreña ha vivido importantes transformaciones que comenzaron a hacerse evidentes en 2005, y que en 2006 se delinearon con nitidez. Esa configuración social —cuyas dimensiones se describen más adelante— persistió en 2007, año en el cual se acentuaron sus rasgos más negativos de cara a propiciar un esquema de convivencia social más solidario, seguro e inclusivo. Desde un punto de vista sociológico, se pudieron identificar tres segmentaciones de la sociedad salvadoreña —fraguadas, como ya se dijo, a lo largo de los años anteriores— en torno a las cuales se articularon las distintas problemáticas sociales suscitadas a lo largo de 2007.

3.1. Los segmentos que concentran el poder económico y político

La primera segmentación abarca a un sector social minoritario, y su núcleo lo conforman los “ricos más ricos de El Salvador”. Este sector reproduce su vida en un ambiente de fantasía y *glamour*. Los grandes centros comerciales (Multiplaza, La Gran Vía, Galerías, Villas

Españolas) constituyen uno de los principales espacios donde se concretan las aspiraciones de ese segmento social. Su otro espacio son los complejos turísticos —o las casas de playa o de montaña— donde los deportes extremos o los deportes de élite (tenis, golf, navegación) pueden ser practicados por quienes pertenecen a él. Aquí, no existe más preocupación que la de disfrutar al máximo los privilegios que el dinero puede comprar. Es disfrute pleno lo que transmiten esos cuerpos atléticos (de hombres y mujeres) que navegan o juegan al tenis en sus fines de semana; es disfrute pleno lo que reflejan en sus rostros sonrientes esos y esas adolescentes retratados —e identificados con sus nombres y apellidos de rigor— por la revista *Blur* en sus noches de fiesta en los exclusivos centros nocturnos de la capital. De otra manera, es también disfrute pleno lo que reflejan sus padres en la revista *el Economista*, cuando se habla del éxito de sus empresas o de los millones que se han embolsado en concepto de ganancias.

En 2007, al igual que en años anteriores, solo unos pocos disfrutaron de los beneficios generados por ese éxito. La mayor parte de salvadoreños quedó fuera del mismo, aunque se le ofreciera —a través una diversidad de recursos publicitarios y mediáticos— como algo fácil de alcanzar. De nueva cuenta, en los círculos de poder económico los problemas reales de la sociedad salvadoreña no tuvieron cabida, porque precisamente en los mismos las preocupaciones de la mayor parte de la gente (conseguir el sustento diario para la familia, pagar el alquiler del lugar donde se vive o buscar trabajo) no tuvieron —ni tienen— ninguna importancia. Las ambiciones y aspiraciones de la élite de poder económico se vieron resguardadas por el segmento social que tiende a concentrar cada vez más el poder político, es decir, el partido Arena.

Desde los círculos de poder de derecha se sostuvo el discurso de la unidad, la paz y el orden. Se repitió una y otra vez el eslogan gubernamental “Un país unido tiene sentido”. En la práctica, la élite que concentra en sus manos cuotas significativas de poder político se complementó con la que concentra el poder

económico. Y es que en las esferas políticas en las que Arena ha impuesto su lógica, solo

caben quienes han triunfado en los negocios —una pequeña minoría—, quienes los admiran y pretenden ser como ellos —un segmento muy reducido de la clase media— y quienes aceptan con pasividad su condición de excluidos en lo social y lo económico —una amplia mayoría de la población—. De este lado están los “buenos salvadoreños”, los amantes de la paz y el orden. Frente a ellos están los “malos salvadoreños”, los inconformes, los que protestan, los que se rebelan. Contra estos últimos todo está permitido; son, en potencia o de hecho —según la perspectiva de la derecha más recalcitrante—, unos “delincuentes terroristas” [...] El país del Gobierno es también un país de fantasía, que, en su pretendida unidad, se afirma negando, como molestas anomalías, realidades constitutivas de la sociedad salvadoreña actual. La exclusión, el conflicto y el desorden son la cara más real, por ser su sostén, del país del ocio, el *glamour*, el consumo ostentoso y el enriquecimiento sin límites.⁵⁰

3.2. El mundo del crimen y la violencia

En El Salvador, una fractura social grave es la provocada por las actividades criminales de distinta naturaleza. Aquí se origina una segmentación que contempla no solo a quienes viven del crimen y la violencia, sino a sus víctimas reales o potenciales. Una de las expresiones más notables de esta particular segmentación la constituye el crimen territorializado —el cual se hizo evidente a partir de 2006—, que ha impuesto la extorsión, la violencia, la ilegalidad y la impunidad en determinadas zonas (territorios) del país. Para quienes ejercen su dominio en estos espacios (mafias del crimen organizado y pandillas), la obtención de ganancias por la vía del miedo no conoce límites. Hicieron suya una de las enseñanzas más perniciosas de los ricos más ricos de El Salvador: lo más importante es la riqueza, para cuya consecución todo vale. En 2006, las bandas criminales llevaron esa filosofía hasta sus últimas consecuencias, bus-

cando dinero fácil donde se pudiera y al precio que fuera. Se valieron de amenazas, chantaje, asesinato y del control de territorios... Todo eso les sirvió para expoliar económicamente a todo aquel que pudiera aportarles algo —ya se tratara de maestros de escuela, comerciantes o empresarios de transporte— en concepto de “renta”, un pago para garantizar la seguridad personal y familiar. Lo más preocupante es que el crimen territorializado se puso fuera del control institucional-oficial. El control era ejercido por el poder fáctico de las bandas criminales, ante las cuales los ciudadanos, indefensos, no tuvieron más que someterse. Aquí, el Estado salvadoreño dejó de existir, en tanto que sus leyes no pudieron ser aplicadas por autoridad alguna.

Con este preocupante trasfondo, ya desde inicios de 2007 se hizo claro que la violencia y el crimen iban a estar presentes en el horizonte de la sociedad salvadoreña, al igual que en años anteriores. En efecto, si diciembre de 2006 dejó una cifra de 100 homicidios (de un total de 3,781 ocurridos durante todo el año), ya en la primera semana de enero de 2007, un motín en el Penal de Apanteos dejó no menos de 21 reos asesinados a manos de pandilleros, en lo que la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, calificó como “una de las masacres más feas que se han visto en los últimos tiempos”. El año 2006 terminó, pues, marcado por una violencia que lo recorrió desde sus inicios, y el nuevo año comenzó igual, marcado por la barbarie. Una violencia que en el segundo mes del año golpeó —aunque no dentro del país, sino en Guatemala— al partido Arena: los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) William Pichinte, Eduardo D’Aubuisson y José Ramón González, así como el motorista Gerardo Ramírez, fueron asesinados el 19 de febrero.

Ese múltiple crimen, sin duda, conmovió a los distintos sectores de la sociedad salvadoreña y centroamericana, y planteó el desafío de enfrentar con contundencia a las redes criminales de la región. Era claro que en ese

50. Cfr. “El Salvador: cuatro países en uno”, *Proceso*, 1210, 20 de septiembre de 2006, p. 2.

momento el problema inmediato a resolver era el asesinato de los tres diputados y su motorista. Pero no había que limitarse a ello, porque esas cuatro personas asesinadas se sumaban a otras víctimas de redes criminales que operan en Guatemala y El Salvador. Se clamó por una investigación exhaustiva, rigurosa y profesional que aclarara si las cuatro personas fueron asesinadas por criminales comunes o si había en juego otras motivaciones, que no necesariamente tenían que ser de carácter político. Sin embargo, esa investigación nunca se realizó a fondo, y las esperanzas de que el crimen se aclarara se evaporaron cuando en un penal de máxima seguridad de Guatemala fueron asesinados los primeros capturados bajo sospecha de haber participado materialmente en el múltiple asesinato. Al cierre de 2007, éste era un delito más que había quedado en la impunidad, obviamente por negligencia de las autoridades guatemaltecas, pero también por la nula integración fiscal y policial que existe entre Guatemala y El Salvador.

Y es que El Salvador es un lugar de impunidad. Es esa impunidad —posibilitada por unas débiles instituciones de seguridad y de justicia— la que explica la proliferación no solo de actividades delictivas de todo tipo, sino la violencia que termina con vidas humanas. A este respecto, el promedio de muertes violentas por día es el mejor indicador de lo deteriorada que está la convivencia social en el país. Según datos del Instituto de Medicina Legal, en 2004, el promedio de homicidios al día fue de 8; en 2005, de 11; en 2006, de 10.7; en 2007 (hasta septiembre), de 9.8. Dicho en términos más brutales, en 2004 fueron asesinadas 2,933 personas, mientras que hasta septiembre de 2007 se habían registrado 2,677 asesinatos⁵¹. Al respecto, es importante decir que buena parte de esos asesinatos revistieron un fuerte

carácter de feminicidio. Es decir, en 2007 las mujeres salvadoreñas siguieron siendo destinatarias de la violencia, al igual que en años anteriores: en 1999, fueron 195 las mujeres asesinadas; en 2002, 193; en 2003, 232; en 2005, 390; en 2006, 437; y hasta junio de 2007, 168 (de un total, para ese mes, de 1740 personas asesinadas)⁵². Y esos asesinatos de mujeres fueron parte de una violencia contra las mujeres que

también se produce en la familia, incluidos los malos tratos, la explotación sexual, el abuso sexual de menores en el hogar [...] violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer. Es un mito pensar que la violencia por motivos de género es perpetrada por extraños, porque en la mayoría de los casos los actos son realizados por alguna persona conocida por la víctima/sobreviviente; y muchos de estos actos violentos son planificados con anticipación.⁵³

En su gran mayoría, esos homicidios y feminicidios quedaron impunes en 2007, al igual que en años anteriores. También la impunidad ha caracterizado a delitos como las extorsiones. Así, a principios de noviembre, la Policía Nacional Civil informó que en el primer trimestre de 2007 las extorsiones —que afectaron principalmente a los departamentos de San Salvador y San Miguel— habían disminuido en un 21.5% respecto del último trimestre de 2006, pero que de los 614 casos reportados en el período solo habían comenzado a investigarse 51, y solo 23 habían sido resueltos. Es decir, apenas se había resuelto el 3.74% del total de extorsiones⁵⁴. Entre julio y septiembre, se reportaron 421 casos más de extorsión. Según la Fiscalía General de la República, 2006 cerró con 2,525 extorsiones, en tanto que de enero a septiembre de 2007 se reportaron 1,692⁵⁵.

51. Labrador, G. y Membreño, T., "Homicidios siguen arriba de cifras 2004", *La Prensa Gráfica*, martes 13 de noviembre de 2007, p. 12.

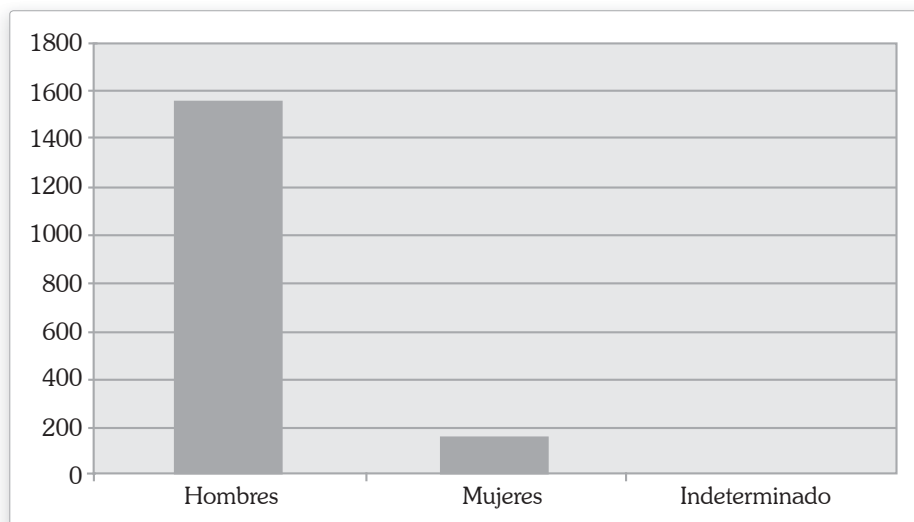
52. Cfr. Vaquerano, G., *El feminicidio en El Salvador: una forma de violencia, control y dominación en contra de las mujeres. Estadísticas de 1999 a junio de 2007*, San Salvador: Ormusa, 2007, p. 3.

53. *Ibíd.*, p. 9.

54. Cfr. *El Faro*, 12-18 de noviembre de 2007.

55. Ávila, M., "Bajaron denuncias por las extorsiones", *El Mundo*, 2 de octubre de 2007.

Gráfico 1
Cifras de homicidios por género (enero-junio de 2007)



Fuente: *La Prensa Gráfica*, 29 de julio de 2007.

A los homicidios, feminicidios y extorsiones se sumaron otras manifestaciones de la violencia que golpeó a la sociedad salvadoreña en 2007. En esta línea, un sondeo realizado por LPG Datos sugirió que “en solo tres meses [de agosto a octubre de 2007], más de 168,000 salvadoreños mayores de 18 años fueron tocados por los delincuentes. Esto permite inferir que en el país se comete un crimen cada minuto”⁵⁶.

Según el sondeo de LPG Datos,

el 72.7% de las familias tuvo que soportar alguna ofensa contra su patrimonio, mayormente asaltos en la calle, así como robos y hurtos en autos y casas. En segundo lugar aparecen los delitos contra la vida o la integridad física, como homicidios, lesiones, amenazas a muerte o extorsiones. La inseguridad y los problemas económicos son las dos grandes preocupaciones de la mayoría de salvadoreños [...] La

Cuadro 8
Feminicidios (1999-junio de 2007)

Año	Número de casos	Población	Tasa x 100,000 h
1999	195	3,134,700	6.22
2000	193	3,195,300	6.04
2001	206	3,255,700	6.34
2002	227	3,316,700	6.84
2003	232	3,376,300	6.87
2004	260	3,435,800	7.56
2005	390	3,494,600	11.16
2006	437	3,552,600	12.37
Junio 2007	168	3,552,600	—

Fuente: Instituto de Medicina Legal.

56. Segura, E., “17% de familias tocadas por la delincuencia”, *La Prensa Gráfica*, 11 de junio de 2007.

delincuencia, por otra parte, tiene modalidades dinámicas que preocupan solo por un tiempo a la gente: ola de extorsiones, ola de robo a furgones, ola de secuestros, etc. Hay, también, modalidades delictivas más complicadas, como los homicidios. El país ha mantenido durante el año una media diaria de asesinatos de 10.2. Cada día, además, nueve vehículos particulares son robados o hurtados en [el] país; y de estos, solo cuatro vuelven algún día a las manos de sus legítimos dueños. Menos de la mitad.⁵⁷

En resumen, en 2007 el mundo del crimen, lejos de ser contenido, continuó expandiendo sus tentáculos, lacerando el tejido social. Y ello fue propiciado y favorecido, tal como fue señalado en el informe elaborado por la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, por las debilidades del sistema de justicia. “La falta de eficacia del sistema de justicia penal —señaló el informe— es un factor que facilita la violencia y delincuencia en el país”⁵⁸. Pero ese es nada más un factor, pues hay otros que también contribuyen a los altos niveles de violencia en el país:

la inequidad; la falta de oportunidades económicas y sociales; las altas tasas de deserción y fracaso escolar; los altos índices de desempleo y subempleo; el abuso del alcohol y drogas; el tráfico de drogas; los factores culturales como la inequidad de género y la violencia intrafamiliar; el desmedido y no planificado crecimiento urbano; los bajos niveles de capital social; los altos índices de impunidad penal; la insuficiente capacidad de las instituciones para hacer frente a la problemática; la amplia disponibilidad de armas de fuego; la presencia de pandillas o maras; las secuelas del conflicto armado; la deportación desde Estados Unidos de personas con antecedentes penales, entre otros.⁵⁹

3.3. La realidad de la mayoría de salvadoreños

El informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social, al reseñar los distintos factores que están en la raíz de la violencia, la delincuencia y el crimen, apuntó a los dinamismos que marcan la vida de la mayor parte de salvadoreños. La mayoría, en efecto, vive una realidad bien particular: la de la pobreza, la exclusión y las necesidades básicas insatisfechas. Esta es la realidad que afecta a la mayor parte de la población salvadoreña, agobiada por dificultades de todo tipo: desempleo, bajos ingresos, salud precaria, miedo, chantajes, amenazas... Sin duda, este segmento de la sociedad salvadoreña es el más real de todos, porque en él vive la mayoría de ciudadanos. Quienes se ubican aquí son los que la pasan peor en todos los sentidos: son los que pagan los costos tanto de las decisiones gubernamentales equivocadas como de la violencia y la inseguridad. Desde otro ángulo, aquí se ubican quienes son expoliados por el Gobierno, los ricos y los criminales. También quienes se ubican aquí alimentan la migración a Estados Unidos, es decir, los expulsados de El Salvador, pero que luego se mantienen vinculados a su país de origen a través de remesas que a diario envían a sus familiares en el territorio nacional.

Lo anterior permite entender la precariedad social que afecta a la mayor parte de la población salvadoreña. Esta precariedad guarda una estrecha relación con la incapacidad del aparato productivo para generar niveles adecuados de empleo, tanto en términos de puestos de trabajo como en términos de salarios acordes con las necesidades básicas de los salvadoreños. Desempleo, subempleo y salarios bajos

57. *Ibidem*.

58. Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social, *Seguridad y paz, un reto de país: Recomendaciones para una política de Seguridad Ciudadana en El Salvador*, San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2007, p. 29.

59. *Ibid.*, p. 39.

se traducen en dificultades permanentes para acceder a una vivienda digna y segura, así como a niveles adecuados de salud y educación. La pobreza extrema es la expresión más aguda de esa precariedad social, que afecta a la mayor parte de salvadoreños y que es inseparable de la desarticulación estructural del aparato económico salvadoreño. En otras palabras, el modelo económico establecido genera vulnerabilidad. Y, como han sostenido distintos autores, en la raíz de la vulnerabilidad está la pobreza. Desde el Gobierno, se ha insistido en que la pobreza ha disminuido de forma significativa en los últimos años. Sin embargo, el PNUD destacó una fuerte alza en el costo de la vida de los salvadoreños. Mientras que voceros oficiales insistieron en que el ingreso por habitante había aumentado, el PNUD afirmó que el alza en el costo de la vida había elevado los niveles de pobreza total y pobreza extrema. Más aún, pudo haber aumentado el PIB per cápita, pero la renta de los salvadoreños no ha alcanzado ese nivel debido a la alta concentración del ingreso que caracteriza al país.

Los datos que maneja el Gobierno presentan una reducción de la extrema pobreza del 15.9% en el período 1991-2005. No obstante, el PNUD considera que la reducción sería diferente si se incluye en el cálculo de la pobreza el alza del costo de la vida. Desde este criterio de medición, la pobreza extrema solo se redujo cerca del 7%. Acá hay que recordar los datos del *Informe de Desarrollo Humano. El Salvador 2003*, elaborado por el PNUD. Según el mismo, en 2003, la pobreza total afectaba a un 43% de la población, en tanto que la absoluta a un 19%. A estos datos, el gobierno de Francisco Flores opuso otros, desde los cuales la pobreza global era del 36.1%, y la pobreza absoluta, del 14.4%. Para 2007 no se tienen datos consolidados sobre la pobreza; sin embargo, para 2006, y en base a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de ese año, la Organización de Mujeres

Salvadoreñas para la Paz (Ormusa) elaboró el cuadro que se presenta a continuación⁶⁰.

Además de informar del total de hogares pobres para 2006 (528,826, es decir, el 30.7% del total de hogares salvadoreños), los datos recabados por Ormusa destacan el impacto de las remesas sobre los niveles de pobreza. Así, del total de hogares que no reciben remesas (1,303,699), el 33.4% son hogares pobres; mientras que del total de hogares que sí las reciben (417,331), un 22.4% son hogares pobres. Según Ormusa, del total de hogares salvadoreños, un 9.5% está en pobreza extrema, mientras que 21.2% está en pobreza relativa. Por su parte, de los hogares que no reciben remesas, un 10.5% está en pobreza extrema, en tanto que el 22.9% está en pobreza relativa. Y, en la misma línea, del total de hogares que sí reciben remesas, un 6.5% está en pobreza extrema, mientras que un 15.9% está en pobreza relativa.

El impacto de las remesas en la reducción de los niveles de pobreza fue reconocido, asimismo, por el PNUD en su *Cuaderno de Desarrollo Humano*, titulado *Trayectorias hacia el cumplimiento de los ODM en El Salvador*:

Los salvadoreños residentes en Estados Unidos generaron en 2004 un ingreso personal equivalente al 127% del PIB del país [...] La mayor parte de los US\$3,315.7 millones que el país recibió en remesas en 2006 provino de esos salvadoreños. Por su monto relativo, por su efecto reductor de la pobreza y por su efecto atenuador de la desigualdad en la distribución del ingreso puede afirmarse que la principal red de protección social en El Salvador es la que se sustenta en la solidaridad familiar de las remesas y los vínculos con las comunidades salvadoreñas en el exterior [...] En 2006, las remesas equivalieron a 18% del PIB y más del 300% del gasto público social. Para muchos hogares del país, las remesas son su fuente principal o su única fuente de ingresos.⁶¹

60. Rubio Jovel, S. M. y Lara López, E., *Mujer y mercado laboral 2007. Indicadores*, San Salvador: Ormusa, 2007.

61. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Trayectorias hacia el cumplimiento de los ODM en El Salvador. Cuadernos sobre desarrollo humano*, 6, mayo 2007, San Salvador: Talleres Gráficos UCA, 2007, p. 47.

Cuadro 9
Situación de pobreza en 2006

Situación de pobreza	Número de hogares			Porcentaje		
	Total de hogares	Sin remesas	Con remesas	Total de hogares	Sin remesas	Con remesas
Total	1,721,030	1,303,699	417,331	100.0	100.0	100.0
Pobres	528,826	435,406	93,420	30.7	33.4	22.4
Extremos	164,319	137,213	27,106	9.5	10.5	6.5
Relativos	364,507	298,193	66,314	21.2	22.9	15.9
No pobres	1,192,204	868,293	323,911	69.3	66.6	77.6
Jefatura hombre	1,131,708	914,142	217,566	100.0	100.0	100.0
Pobres	354,671	303,923	50,748	31.3	33.2	23.3
Extremos	108,882	92,249	16,633	9.6	10.1	7.6
Relativos	245,789	211,674	34,115	21.7	23.2	15.7
No pobres	777,037	610,219	166,818	68.7	66.8	76.7
Jefatura mujer	589,322	389,557	199,765	100.0	100.0	100.0
Pobres	174,155	131,483	42,672	29.6	33.8	21.4
Extremos	55,437	44,964	10,473	9.4	11.5	5.2
Relativos	118,718	86,519	32,199	20.1	22.2	16.1
No pobres	415,167	258,074	157,093	70.4	66.2	78.6

Fuente: Ormusa, *Mujer y mercado laboral 2007*. Indicadores.

Conviene recordar que la principal meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la reducción de la pobreza extrema (reducir el indicador a más de la mitad de su valor correspondiente a 1992) y atacar sistemáticamente la desnutrición. Según la investigación del PNUD, “la meta de reducción de la extrema pobreza (ODM 1) utilizando indicadores nacionales ha sido ya alcanzada”, pues en el período 1992-2005 los hogares en situación de extrema pobreza se redujeron del 27.7% al 12.3%. No obstante, el estudio aclara que al medir la pobreza con los estándares oficiales es probable que se subestime el porcentaje de personas en pobreza extrema que realmente hay en el país, pues los estándares internacionales de medición acostumbran calcular la pobreza como proporción de la población y no como el porcentaje de hogares. Si se estima la pobreza en base al criterio internacional, en 2005 el porcentaje de personas —no de hogares— en extrema pobreza sería del 15.9%, cifra superior al 12.3% —de hogares— que maneja en sus informes el Gobierno salvadoreño.

Lo mismo sucedería con la pobreza total, pues, para el mismo año, el número de pobres subiría del 35.2% —por hogares— al 42.1% —por el número de personas—. Utilizando el cálculo de la pobreza por el número de personas, el PNUD también aplicó el criterio de menos de un dólar al día para las personas en extrema pobreza y de menos de dos dólares diarios para los pobres. Según este método —generalizado por los ODM a nivel mundial—, la pobreza extrema y total son del 18.6% y 44.6%, respectivamente. Como se puede ver, la pobreza extrema aumenta 2.7% y la total en 2.5%. Por último, el estudio calculó la pobreza tomando en cuenta el aumento del precio de la canasta básica alimentaria y el alza en el costo de la canasta ampliada. El resultado de utilizar esta metodología no debería pasar desapercibido, porque es una de las formas que incluye el alza en el costo de la vida. Además, en términos generales, dichos resultados son más consistentes con la realidad que los métodos anteriores. Según la metodología del PNUD en El Salvador, la po-

breza extrema y la pobreza total es de 27.7% y 58.4%, respectivamente. Sin duda, estas cifras reflejan una situación muy diferente a la oficial al mostrar que un poco menos de un tercio de la población del país está en situación de extrema pobreza. En la misma dirección, los datos muestran que casi el 60% de los salvadoreños viven con ingresos familiares mensuales por debajo de los \$400⁶².

Cuadro 10
Costo de la canasta de mercado
(en dólares)

Mes	Costo	Variación (%)
Mayo 06	670.4	0.0
Junio 06	675.9	0.8
Julio 06	684.4	1.3
Agosto 06	680.7	-0.5
Septiembre 06	680.4	0.0
Octubre 06	677.8	-0.4
Noviembre 06	682.0	0.6
Diciembre 06	688.0	0.9
Enero 07	696.0	1.2
Febrero 07	694.4	-0.2
Marzo 07	698.7	0.6
Abril 07	699.2	0.1
Mayo 07	696.4	-0.4

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).

En 2007, ni el aumento en el comercio exterior ni la política social se tradujeron en bienestar para un amplio sector de las familias salvadoreñas. Los logros en materia macroeconómica (mayor crecimiento del PIB, aumento de las exportaciones, disminución del desempleo en el sector formal y leve disminución en la deuda externa) no bastaron para atender las necesidades y problemáticas concretas de los salvadoreños: alta tasa de desempleo abierto, mayor costo de la canasta básica y reducción de los salarios reales. Es decir, los éxitos relati-

Cuadro 11
Costo de la canasta ampliada urbana
(en dólares)

Mes	Costo	Variación (%)
Septiembre 06	276.6	0.0
Octubre 06	274.5	-0.8
Noviembre 06	280.0	2.0
Diciembre 06	288.0	2.8
Enero 07	292.7	1.6
Febrero 07	287.2	-1.9
Marzo 07	286.9	-0.1
Abril 07	284.8	-0.7
Mayo 07	280.0	-1.7
Junio 07	288.3	2.9
Julio 07	294.3	2.1
Agosto 07	295.9	0.5
Septiembre 07	297.3	0.5

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Digestyc.

vos obtenidos en el campo económico fueron insuficientes para hacer frente a las necesidades que se generaron en diez años de estancamiento. En este sentido, y en base a una perspectiva más amplia, el Gobierno fue irresponsable al proclamar como grandes logros lo que sólo fue resultado de una apuesta por un estilo de crecimiento que ha rendido frutos para un segmento reducido de la sociedad. Aunque se tratara de un logro, este fue insuficiente para solventar las necesidades materiales acumuladas desde el segundo quinquenio de la década pasada. Para hacerles frente no bastaba con resultados positivos en el crecimiento económico; también era necesaria una política social fuerte que acompañara dicho crecimiento con la redistribución del ingreso nacional. En otras palabras, lo que se podía hacer en materia de desarrollo social dependía en gran medida de la disposición del Gobierno para atacar sistemáticamente la concentración del ingreso. El cambio a una política fiscal progresiva pudo haber sido un

62. Cfr. "El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en El Salvador (I)", *Proceso*, 1245, 13 de julio de 2007, pp. 6-7.

paso importante en esa dirección. Pero es un paso que no se dio.

En definitiva, la realidad de la mayor parte de la población salvadoreña es una realidad caracterizada por necesidades básicas insatisfechas. Esto tiene que ver, por un lado, con la situación laboral: en 2006, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de ese año, los ocupados plenos hombres y mujeres ascendieron a un 64.7% y un 60.2%, respectivamente. Mientras que un 35.3% de hombres y un 39.8% de mujeres estuvieron subempleados. En segundo lugar, la precariedad social en El Salvador también está relacionada con el deterioro de los ingresos: según el PNUD, el salario promedio real cayó casi en 22% durante el período 2000-2006, a la vez que la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó⁶³. El PNUD señaló con claridad uno de los remedios a los males sociales del país: “[...] Políticas públicas más proactivas, que contribuyan a propiciar tasas más altas de crecimiento y a paliar la concentración del ingreso mediante las adecuadas políticas redistributivas, tanto en materia impositiva como en la esfera del gasto público social”⁶⁴. Otro remedio es la participación ciudadana activa, de la cual en 2007 apenas se tuvieron algunas manifestaciones puntuales, vinculadas sobre todo a la defensa de los recursos naturales o a la resistencia ante prácticas contaminantes. De consolidarse dicha participación, podría introducir un giro importante en el quehacer de la sociedad civil salvadoreña y en las relaciones de ésta con el poder político y económico⁶⁵. En esta línea, el *quid* del asunto no está sólo en lo que el Gobierno y la empresa privada decidan hacer, sino de la capacidad de la sociedad de intervenir, a través de sus organizaciones más consolidadas, en la dinámica del país.

4. Perspectivas para 2008

Tomando como punto de partida el balance precedente, se pueden esbozar algunas de las posibles dinámicas que podrían caracterizar al año 2008. Se trata de dinámicas que tendrán mayores visos de convertirse en realidad si no hay sucesos extraordinarios que alteren los ritmos que el país tuvo en 2007.

En materia política, 2008 se vislumbra como un año particularmente tenso. Será un año en el cual la actividad gubernamental y partidaria se centrará de lleno en la campaña electoral en vistas a los comicios de 2009. Del lado del FMLN, es presumible que los ejes de su quehacer político electoral sean (a) asegurar la presencia pública de su fórmula presidencial, especialmente de Mauricio Funes; (b) elaborar y divulgar su propuesta de gestión gubernamental 2009-2014; (c) definir la estrategia y los candidatos para al menos asegurar la cuota municipal (principalmente en San Salvador) y legislativa que ya se tiene; y (d) estar alerta a —y defenderse de— los ataques que Arena y sus aliados mediáticos vayan realizando en la medida que la campaña avance y los ánimos se vayan caldeando. Del lado de Arena, sus dos principales tareas para el otro año son (a) encontrar un candidato a la presidencia de la República que esté a la altura del candidato efemelenista; y (b) lograr que ese candidato haga suyo el discurso de compromiso social que el presidente Saca y un sector del partido consideran estratégico para la campaña de 2009. Es seguro que Arena invertirá buena parte de sus energías en ambas tareas. Pero otras se dedicarán —como ya es tradición en este partido— a la realización de una campaña sucia, mediante la cual se buscará desalentar cualquier apoyo popular y de las clases medias hacia el FMLN. Aquí los grandes medios

63. PNUD, *Trayectorias hacia el cumplimiento de los ODM en El Salvador*, óp. cit., p. 33.

64. *Ibíd.*, p. 124.

65. Cfr. “Organización social de base y perspectivas del movimiento social”, *Proceso*, 1257, 12 de septiembre de 2007, pp. 2-3. Obviamente, la participación social organizada enfrentó dificultades en 2007; como ejemplo de ello puede citarse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el Convenio 87 de la OIT, mediante el cual se garantiza la libre sindicalización de los empleados públicos. Cfr. Saavedra, M. A., “Golpe al sindicalismo”, *El Independiente*, lunes 12 noviembre de 2007, p. 6.

de comunicación podrían hacer la diferencia no dando espacio a calumnias de ningún tipo (suscritas o no por personas privadas), pero también no realizando ellos mismos una campaña de miedo a favor de Arena.

Como quiera que sea, la campaña electoral de 2008 va a enfrentar de nuevo a Arena y al FMLN, pero las condiciones de esa batalla van a ser distintas a las de otras ocasiones: el FMLN lleva un candidato que si se presenta con un programa de gobierno viable y realista, puede convertirse en el próximo presidente de El Salvador. En Arena, sus miembros más lúcidos lo saben; y saben que esta campaña no será como otras, en las cuales la superficialidad publicitaria y los chantajes y las amenazas fueron suficientes para ganar. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA⁶⁶, realizada entre octubre y noviembre de 2007, puso una presión adicional sobre el gobierno de Antonio Saca y Arena: sus resultados no solo reflejaron un malestar generalizado de la población por las dificultades para vivir (el 67.9% de los entrevistados dijo que la pobreza había aumentado en 2007), sino que en términos de intención de voto el FMLN sacó una importante ventaja en la elección municipal (FMLN, 31.5%; Arena 25.4%), legislativa (FMLN, 32.3%; Arena, 25.2%) y presidencial (FMLN, 34.5%; Arena, 27%). Estos datos obligarán a Arena a apuntalar mejor su campaña, privilegiando aquellos contenidos que ya han mostrado su potabilidad. Lo mismo hará el FMLN. Y, sin duda, la meta principal de ambos partidos será la conquista (reconquista en el caso de Arena) del Ejecutivo. A esta meta subordinarán sus esfuerzos por renovar sus mandatos municipales y sus cuotas en la Asamblea Legislativa. Esta va a ser también la principal meta del resto de partidos, los cuales en 2008 se embarcarán de lleno en reactivar y fortalecer sus redes de apoyo local.

En materia económica será muy difícil esperar que se renuncie a la estrategia de crecimiento por la que se ha optado, anclada en la terciarización económica y con una apuesta clara por la ampliación de los servicios turísticos y al mantenimiento de las remesas. A esta estrategia se va a continuar subordinando no solo la diversificación de las exportaciones no tradicionales, sino los intentos de reactivación del sector agrícola y de potenciación del sector industrial. Es decir, seguramente se insistirá en seguir buscando como alternativa al declive relativo de la industria maquilera la promoción de las inversiones extranjeras en el rubro del turismo, y, aunque con más cautela, la explotación de los recursos naturales. En este sentido, al mantenerse el modelo económico vigente, los problemas básicos derivados del mismo se mantendrán vigentes en 2008⁶⁷. Para comenzar, los niveles de pobreza se mantendrán prácticamente inalterados por la dinámica económica endógena. El desempleo, el subempleo y los bajos ingresos, por lo mismo, continuarán afectando a un elevado porcentaje de la población. El paliativo para los males generados por el modelo económico seguirá proviniendo de una de sus consecuencias más perversas: la migración a Estados Unidos. Y es que nada indica que las remesas enviadas desde Estados Unidos a El Salvador vayan a disminuir drásticamente en 2008, por lo cual seguirán siendo la mejor red de protección social con la que cuente el país para hacer frente a la pobreza generada como resultado de sus dinanismos económicos internos.

Por último, en materia social, los problemas que han golpeado a la sociedad salvadoreña en 2007 no tienen visos de resolverse. Al no haberse consolidado en el año que acaba de finalizar los prerrequisitos institucionales para hacerles frente, la violencia, la criminalidad y la impunidad seguramente mantendrán sus

66. Cfr. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), *Informe 114. Encuesta de evaluación del año 2007*, San Salvador: IUDOP, 2008. Disponible en <http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2007/Informe114.pdf>.

67. Incluso en el caso de que el futuro gobierno asuma la estrategia económica planteada por el VIII Enade —basada en la competitividad y el crecimiento—, el modelo económico establecido seguramente llegará a sus límites en sus fracturas estructurales.

mismos niveles e incluso sus expresiones más brutales. El crimen territorializado seguirá extendiendo sus tentáculos, imponiendo su ley en distintas zonas del país. Desde el Gobierno —con fines claramente electorales— se continuará con la práctica de leer como éxitos en la lucha contra el crimen avances minúsculos; avances que en realidad pondrán en evidencia la ineficiencia e incompetencia judicial, fiscal y policial. En la misma dirección, se hará una publicidad exagerada de las exiguas medidas de compensación social que se pudieran añadir a las que se impulsaron en 2007: aumento salarial, mantenimiento del subsidio al gas propano y congelación de las tarifas de electricidad, al igual que con las 19 medidas contenidas en la propuesta Alianza por la Fa-

milia, divulgada por el presidente Saca el 3 de diciembre de 2007.

Con toda seguridad, la Alianza por la Familia, al igual que las medidas anunciadas en octubre, será uno de los puntales de la estrategia de campaña de Arena (anclada en el discurso de compromiso social de Saca). El único problema —ciertamente grave para el Gobierno— es que para dar credibilidad al discurso de compromiso social deberá sostenerlo con acciones que hagan llegar algún beneficio concreto a la gente. Y esto requiere recursos; recursos con los que el gobierno de Antonio Saca no cuenta y que al sector empresarial más poderoso le puede resultar muy molesto conceder solo para que Arena renueve su mandato.